

# Chihuahua y los límites de la democracia electoral

ALBERTO AZIZ NASSIF

*A Lidia, Ricardo, Yuya y Mauricio*

“Alejarse del retrato convencional, del ilegítimo retrato académico. Un retrato cezanniano, construido con facetas, con montajes de sentimientos y resentimientos. Cuántas veces creemos que algo descubrimos, que nuestra pesquisa es provechosa y no estamos sino inventando.”

LUIS CARDOZA Y ARAGÓN

## INTRODUCCIÓN

Hace 30 años José Revueltas escribió que la democracia mexicana era una “democracia bárbara”. Hoy podríamos decir que el calificativo aún es vigente en cierto sentido. El trabajo que tiene en sus manos el lector ahora es un intento por descifrar por qué la democracia electoral aún no tiene carta de ciudadanía, ni ha cumplido la mayoría de edad.

Más que un lamento por lo que no fue, el caso Chihuahua expresa hoy los límites que tienen las elecciones vistas desde una región, la del norte mexicano, experiencia específica y al mismo tiempo similar a otras regiones. Entremezclados como distintas facetas del texto, conviven el ensayo, la crónica y el análisis. No queremos presentar sólo un escenario absurdo de una sociedad civil que tuvo el anhelo por una democracia electoral que no llegó, sino el impulso y la vitalidad de un movimiento social amplio que logró convergir en una demanda histórica de este país: el sufragio efectivo.

En 1955, Fernando Jordán escribió en el prólogo de su libro *Crónica de un país bárbaro*, el sentido que tenía el adjetivo para hablar del estado de Chihuahua: “para mí, bárbaro es sinónimo de fuerza y de voluntad [...] de un supremo anhelo por la libertad”. Para Revueltas lo bárbaro era antagónico de lo civilizado, de una “verdadera democracia”. El caso Chihuahua que ahora presentamos tiene el doble significado de lo bárbaro.

En la primera parte se hace un breve recuento de las facetas, estructuras y dinámica de la democracia mexicana. Hemos querido presentar las dos caras del campo político electoral en México, el garrote y las formas de dominación, la estructura de control y los mecanismos de coerción que operan en los procesos electorales; y también, las maneras mediante las cuales se ha construido el consenso y la legitimidad de los procesos electorales.

En el caso Chihuahua se enfrentaron dos formas de hacer política, el modelo tradicional priísta de gobernabilidad con una fuerte dosis de agotamiento, frente a una ciudadanía activa y liberal que pretendió la alternancia en el poder. Esta comprensión nos llevó a presentar la inadecuación resultante de una modernización económica como telón de fondo, que no logra encontrar cauces para correr en una modernización política, para lo cual tratamos de caracterizar el mercado político como una correlación de fuerzas donde se presentaron las ofertas y las demandas.

Tanto la democracia como el mercado político tienen sus principales vectores en una dinámica social que hemos caracterizado como la gran convergencia pre-electoral, en donde tuvieron su presencia los actores, las reglas del juego democrático y los antecedentes más relevantes de 1986.

La segunda parte consiste en un recuento pormenorizado del proceso electoral de 1986, las etapas, los proyectos, los candidatos, las campañas y el tipo de discursos ideológicos que formaron la escena política chihuahuense hasta antes del 6 de julio, día de las elecciones.

Posteriormente, analizamos el fraude electoral y sus consecuencias, en lo que fue el surgimiento de una insurgencia cívica, un movimiento social de convergencia poselectoral, el ambiente, las acciones, los participantes, su evolución y finalmente su repliegue antes de traspasar la frontera de la violencia.

Por último, se hace la crónica de lo que fue el epílogo del movimiento y la fuerza de los hechos consumados que se impuso; para terminar con un boceto de lo que puede ser el futuro probable del caso Chihuahua.

Hemos trabajado el caso desde hace algunos años, por ello ahora queremos presentar un resultado, que en lugar de proponerse como un texto conclusivo de respuestas acabadas, consideramos que abre preguntas para un futuro incierto, en donde surgen todos los días movimientos sociales que por distintas razones y causas convergen en la necesidad de buscar una democracia para el fin de siglo mexicano, frente a la "obsesión por la unanimidad" de la cultura priísta que se desmorona lenta pero inexorablemente.

Si el inicio del siglo xx mexicano fue la búsqueda cruenta por un sufragio efectivo contra la dictadura porfirista, probablemente el final del siglo tenga por escenarios la lucha por la democracia, en donde la sociedad civil adquiera su papel de protagonista y con una fuerza bárbara logre hacer contrapeso a la "democracia bárbara" en la que aún vivimos.

Este trabajo fue posible gracias al apoyo institucional del Centro de

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. El autor se benefició de los comentarios y críticas de Sergio Zermeño, Juan Molinar, Elena Azaola, Ricardo Pérez Montfort, Luis Aboites y Lidia Pico, los cuales contribuyeron a enriquecer el texto; aunque las fallas y limitaciones son responsabilidad del autor.

#### NOTAS SOBRE LA DEMOCRACIA MEXICANA

I. Finalmente, el 3 de octubre de 1986, en medio de un dispositivo de seguridad para alto riesgo, Fernando Baeza tomaba posesión como gobernador de Chihuahua, ante la presencia del presidente de la República. Con lo cual el caso llegaba a su polémica conclusión. Para unos sería un usurpador, para otros sería legítimo.

Históricamente, la democracia mexicana se ha construido sobre la base de un Estado de coaliciones populares, con un presidencialismo como centro rector de la política nacional (desde Cárdenas) y un partido de masas corporativizadas que han sido el eje dominante de los procesos electorales, frente a una oposición que sistemáticamente ha sido debilitada, alquimizada y reducida al catálogo de las minorías.

La democracia mexicana se ha topado con serios obstáculos que la han hecho cada vez más ritual y menos creíble. Las reglas de la competencia, el principio de mayoría y la libre elección han sido constantemente vapuleados por un aparato estatal que legisla, controla y cuenta los votos en los procesos electorales. La ciudadanía ha intentado en diferentes momentos y coyunturas hacer valer su voto y se ha encontrado con una voluntad de poder que predetermina las reglas del juego.

En la ciencia política, una pregunta ha sido repetitiva, ¿quién vigila al vigilante? En la democracia mexicana, esta pregunta está presente y ha sido interpretada de muchas formas; una, que en estos momentos es fundamental, es: ¿quién cuenta los votos? Ante la racionalidad priísta de ganar o en su caso arrebatar los puestos de elección popular, hay históricamente múltiples ejemplos de lo que ha sido la voluntad de poder; desde las jornadas del vasconcelismo hasta las experiencias almazanistas y el más heterogéneo y variable mosaico de los procesos de elección regionales y locales, en donde una buena parte de ellos ha estado marcada por un signo: la no competitividad electoral.

II. Dentro de la división del trabajo político, hay un espacio que expresa con nitidez la competencia entre partidos para lograr el monopolio legítimo: el campo electoral. Con una fuerte tradición, que fue influencia ideológica desde el siglo XIX, el país ha navegado entre el sufragio efectivo y la no-reelección, entre la democracia y la permanencia en el poder y entre la voluntad de poder y la voluntad ciudadana.

En México, a partir de 1929 se instaura el régimen de partido de Estado, cercano al movimiento revolucionario y lejano a la modernidad de

un país industrializado. Con una historia más que compleja, que ha sido estudiada acuciosamente, el partido del Estado pasa de ser, en sus primeros años, un partido de caciques, caudillos y balazos, a ser otro de caciques, masas e instituciones, pero sin dejar de mediar el poder patrimonial como principal mecanismo de sucesión y base del antagonismo de la modernidad y la democracia como aspiración civil.

Con estrategias que van del discurso revolucionario como inspirador del decir, a la voluntad de conservación, reproducción y administración del poder como el hacer, el partido oficial se constituye como el eje fundamental de la democracia mexicana, con una estructura corporativa, conectada con el presidencialismo, configurando el principal mecanismo de negociación entre las masas y los líderes.

El sistema de partidos que integra el campo político-electoral se conforma por una regla básica: la competencia desigual. Desde el momento en que el partido oficial se conecta al aparato de Estado y se institucionaliza la ideología de la Revolución mexicana como la versión oficial, el resto de los competidores quedan prácticamente reducidos a minorías.

La izquierda, que se inclina por el trabajo sindical, pierde desde temprano su convicción electoral para convertirse en la maestra del movimiento obrero. La derecha, que conjuga una serie de disidencias contra el partido oficial convertido en agencia electoral del Estado, reúne desde grupos católicos confesionales hasta sectores empresariales de corte liberal, en un variado mosaico del que surge, 10 años después del partido de Calles, el Partido de Acción Nacional, comandado por Gómez Morín, para situarse en el espectro político como un competidor minoritario y aglutinador de los ciudadanos que quedaron fuera del corporativismo triunfante del cardenismo.

III. El campo político-electoral configuró simbólicamente una cultura política del poder cuyo estigma fue: todo dentro del partido, nada fuera de él.

Los diferentes sectores de la sociedad civil se acomodaron y se relacionaron con el Estado mexicano y con su partido. Así, al término de la guerra cristera, la Iglesia y el Estado arreglaron el conflicto en un pacto de conciliación que deslindó los espacios de actividad para cada uno, la política pública para el poder estatal, la política en privado para el poder eclesiástico.

Los grupos del capital dejaron de sentirse amenazados con la emergencia de la unidad nacional del avilacamachismo y posteriormente, con Alemán, dejaron de necesitar gestores e interlocutores fuera del grupo gobernante priísta, pues el pacto social garantizaba de hecho y de derecho la afinidad de proyectos.

Los sectores populares y las clases subalternas entraron a la vida institucional y funcionaron como apoyo político y electoral en el sindicato y en el partido; la incorporación masiva de la CTM, en 1938, al partido del Estado, garantizó el último tornillo de la maquinaria corporativa.

Los minoritarios sectores medios de aquel México que iniciaba la indus-

trialización no representaban problema, pues aunque no estaban incorporados formalmente al aparato estatal, se tenía una amplia gama de posibilidades, de "oportunidades", dentro de la vida urbana.

El corporativismo que estructuró a los gremios obreros y campesinos impidió tempranamente que las opciones de democracia electoral se desgranaran fuera de la mazorca del partido oficial. La conflictividad social pasaba sólo intermitentemente por los procesos electorales.

Algunos rasgos del corporativismo mexicano afectaron directamente los procesos electorales, como la estructura obligatoria que convierte a los obreros y campesinos en masas de maniobra de las directivas políticas del partido. El mismo factor que eliminó la competencia impuso la cooptación que determinó que las asociaciones y gremios sindicales funcionaran bajo un control gubernamental. El monopolio en la representación de intereses excluyó también la competencia pluralista y centró al conjunto de organismos gremiales dentro de la visión ideológica y arbitrariamente legítima de la Revolución mexicana.

Todos estos rasgos configuraron una estructura en donde las masas de maniobra llenaron los mimbres de las campañas políticas, con lo cual se tuvo una base de poder inmensa, con una dinámica que tendió a consolidar una hegemonía pasiva.

IV. Otro factor que influyó directamente en los procesos electorales, convirtiéndolos en rituales sin competitividad, fue la inclusión del aparato estatal, tanto en recursos como en legislación. Enfrentarse al partido oficial significa competir en contra del Estado que se metamorfosea en partido. De esta forma, los recursos presupuestales, el apoyo de las dependencias públicas, la integración de las masas de maniobra y la "ideología revolucionaria" hicieron del partido un núcleo de poder casi invencible en las contiendas por los puestos de elección popular, con lo cual los triunfos electorales del PRI-Estado contienen tres factores que van de la mano: la obediencia permanente y regulada a las directivas del poder del Estado, la organización jerárquica en forma jurídica, administrativa y militar para la defensa de los puestos de elección popular y el aprovisionamiento de los recursos, por la vía del sistema de gasto público, para mantener, apuntalar y costear campañas políticas y desempeños de gobierno.

Estas características hicieron que el sistema político-electoral tuviera una especificidad propiamente mexicana, en donde se logró crear y hacer funcionar un sistema amplio de mediaciones, que integra los contingentes corporativizados; concierta los diversos intereses de clase; vincula la política del presidente de la República en turno con los programas políticos del partido; sirve de colchón al presidencialismo legislativo en las cámaras de diputados y senadores; establece los puntos de contacto entre los líderes sindicales, caciques y funcionarios públicos; hace la gestoría de las clases subalternas con las dependencias públicas para obras y servicios; es el encargado de realizar la política de masas del Estado de bienestar mexicano, o de lo que hoy en día queda de él.

En síntesis, el campo electoral, en donde el partido oficial es el eje dominante, tiene los recursos de la federación, vestido con el ropaje del control corporativo usa y mueve con organización las masas de maniobra y finalmente dispone de la violencia legítima de la fuerza pública y el ejército y de la violencia simbólica de la legislación electoral que se mueve a voluntad, abriéndose o cerrándose de acuerdo con el peligro de la coyuntura a que se enfrente.

V. Un ingrediente que permea al sistema político-electoral mexicano es el consenso y la legitimidad, que a través de las formas democráticas se mantiene en operación permanente.

No sólo el garrote de los procesos electorales, sino también la zanahoria es importante. Desprendido de los pilares y lingotes ideológicos de la Revolución mexicana, la Constitución y la inspiración presidencial en turno, el campo político-electoral es constantemente barnizado de credibilidad. Las reglas del juego democrático se discuten abiertamente, aunque se decidan en privado; el sufragio se realiza de acuerdo con los calendarios establecidos; la libertad de expresión está relativamente asegurada, por lo menos en algunas publicaciones; la concertación de intereses funciona cotidianamente. Todos estos rasgos rigen formalmente a la democracia mexicana, donde se respeta la regla de oro, la de la mayoría, salvo en situaciones de excepción.

Históricamente, en los últimos 40 años, la conflictividad social ha permeado distintos espacios, como el sindical, el campeisno, el universitario, y sólo de forma esporádica ha tocado al campo electoral. El sistema de partidos funcionó durante décadas dentro de las reglas del juego, salvo excepciones en donde estaba en peligro algún puesto de elección. El PRI ganaba elecciones dentro de un panorama de poca competitividad, la regla de la mayoría se convertía en unanimidad y las oposiciones de izquierda y de derecha se desgastaban en participar contra un bloque multiforme en donde no lograban avanzar un centímetro, salvo excepciones.

De los diversos paradigmas que se han construido, la democracia corporativa mexicana fue el proyecto a seguir dentro de un capitalismo subdesarrollado, como una democracia limitada sin competencia, con una regla de unanimidad, un sufragio predeterminado y un pluralismo raquíctico.

El Estado mexicano fue una combinatoria del keynesianismo, en cuanto a su intervención en la economía, y una estructura corporativa de control de masas; pero conservando las formas democráticas, sin sacrificar el desarrollo del capitalismo dentro de una integración de coaliciones populares como su arquitectura básica.<sup>1</sup>

VI. El balance entre las situaciones electorales, en donde se conservan

<sup>1</sup> "Se ha dicho muchas veces que la política keynesiana fue el intento de salvar el capitalismo sin salir de la democracia, en contra de las dos soluciones opuestas existentes: la de abatir al capitalismo sacrificando la democracia (práctica leninista) y la de abatir a la democracia para salvar el capitalismo (fascismo)." Norberto Bobbio: *El futuro de la democracia*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 98.

las reglas del juego democrático, y los casos de excepción, en donde se rompen, ha cambiado en los últimos años en el país.

La justificación del llamado "fraude patriótico" ha dejado de tener sentido y credibilidad, porque se ha puesto en claro una cosa: las votaciones por otras opciones no son de camarillas secretas a la vieja usanza santanista, sino de una población civil que censura la conducción de la política nacional grupos heterogéneos que apuestan a la democracia como aspiración civil, que demandan un pluralismo y están en contra de la unanimidad que se ha empezado a volver insostenible.

Esta situación ha generado últimamente una tendencia creciente de conflictos que se canalizan ahora en los procesos electorales y que muestran la evidencia de que el "carro completo" ya no tiene credibilidad y sólo aumenta el desgaste de un modelo de democracia corporativa que tiene pies de barro electorales.

La sofisticada maquinaria estatal que instrumenta las operaciones de fraude electoral, como una forma de supervivencia del sistema, abre un amplio abanico de experiencias que ya se acumulan en la memoria de la sociedad civil. Casos como la matanza de León, Guanajuato, en los años 40, o la represión contra el navismo en San Luis Potosí en los 60 y ahora de nuevo en 1985-1986; o los casos como el de Juchitán en Oaxaca y los múltiples eventos de la democracia reprimida en Chiapas; gubernaturas disputadas como las de Sonora y Nuevo León en 1985 y la de Chihuahua en 1986, nos muestran la cara oscura de la democracia mexicana.

VII. El caso Chihuahua se convierte ahora, junto con otros como el de Sonora, el de Nuevo León y el de San Luis Potosí en 1985, en la punta más acabada de un nuevo paradigma político-electoral que empieza a gestarse y pone en crisis a la democracia corporativa y a la hegemonía del partido oficial. Los grupos de la sociedad civil entran en conflicto con el Estado y su partido y golpean de frente a la legitimidad oficial. Iglesia, empresarios, sectores medios y clases subalternas rechazan el régimen y se aglutinan en torno a una democracia civil con fuerte contenido de insurgencia y con una bandera mínima para cualquier sistema democrático: el respeto al voto.

Lo que está en juego en Chihuahua desde 1983 y que ahora en 1986 se agudizó al extremo, es una nueva situación política que surge a partir del relativo agotamiento de las formas tradicionales de gobernabilidad priísta, frente a un nuevo modelo de democracia que está más acorde con la integración a la economía norteamericana y a la modernización industrial del país en general que se lleva a cabo en el norte de la República.

En términos políticos, esta nueva situación, que surge en el contexto de la crisis, pero no como una consecuencia directa, se puede formular provisionalmente como la pugna existente entre la democracia corporativa de masas de maniobra y monopolio de representación de intereses, frente a una nueva forma de participación ciudadana e individual que busca el respeto al voto y la alternancia en el poder.

El caso Chihuahua está inscrito entre las contradicciones que se presentan hoy en el país; se abre la economía y se entra a un proceso acelerado de modernización y reconversión industrial y se quiere seguir manteniendo el mismo aparato de control y las viejas fórmulas de concertación política. Esta contradicción se hace evidente en el norte mexicano, porque esa modernización ha empezado ya en serio y expresa una sociedad que camina rápidamente a la modernización, como síntesis integradora a la región sur de los Estados Unidos y cuyos ingredientes más visibles hoy son: la economía de maquila que transforma la economía tradicional de un estado como Chihuahua, y la democracia electoral como aspiración civil, que aglutina y moviliza a grupos sociales heterogéneos en contra de la unanimidad oficial.

#### EL MERCADO DE LA POLÍTICA

I. Hace poco, Friedrich Katz respondió a una pregunta importante sobre la relación entre el estado de Chihuahua de Pancho Villa y el de hoy; el historiador dijo: "Es difícil responder a esto, pero creo que hay un aspecto importante de los chihuahuenses: es un pueblo que no se deja y que obviamente siempre ha sido rebelde [...] En Chihuahua hay una tradición de lucha e independencia que parece ser algo único en México. Y creo que esta tradición es un aspecto muy importante en la realidad chihuahuense de hoy."<sup>2</sup>

De los escenarios de la revolución que vino del norte, a la instalación de la franja maquiladora que ve hacia el norte, en Chihuahua han tenido lugar importantes luchas sociales que no han transitado históricamente por conflictos electorales significativos, sino hasta hoy, en los años ochenta.

En Chihuahua, el mercado de la política se configuró, a semejanza de lo que ocurrió en otros estados del país, de acuerdo con la racionalidad contundente del partido oficial: el poder y su relación intrínseca con el aparato estatal. El presidencialismo, las coaliciones populares, los grupos empresariales, la Iglesia y los sectores medios se repartían el poder dentro de esa racionalidad. Las diferentes oposiciones partidarias, de izquierda y de derecha, tenían una presencia intermitente en los escenarios de la lucha por el poder que los condujo a otra racionalidad: la de ser minorías sin competitividad ni proyecto de poder.

En 1940 se dice que Chihuahua votó por Almazán, y que las pugnas entre callistas y cardenistas se resolvieron en una negociación que llevó al candidato local, Alfredo Chávez, a la gubernatura por el triunfo que obtuvo sobre Fernando Foglio Miramontes, quien fue el siguiente gobernador. De cualquier forma, fueron pleitos internos que retrataban a una joven familia revolucionaria; la mecánica del partido funcionaba y la

<sup>2</sup> En la revista *Nexos*, núm. 107, noviembre de 1986.

democracia corporativa, de reciente creación, no tenía enemigo peligroso; la competitividad era interna.

16 años después, cuando el país había experimentado el tránsito del cardenismo al alemanismo, el proceso económico se encontraba en pleno auge con la sustitución de importaciones, y el milagro mexicano se trasladaba más allá de las fronteras; se había celebrado la última transformación del partido oficial y la democracia corporativa caminaba hacia la plena institucionalización autoritaria; en Chihuahua se vivía un primer proceso electoral relativamente competido. El joven panismo de 1956 salía a la lucha electoral y hacía una campaña en serio contra el PRI. El caso fue la disputa por la gubernatura entre el senador Teófilo Borunda y el industrial textil Luis H. Álvarez. Posiblemente fue la primera vez que en Chihuahua se enfrentaron dos modos de hacer política: la democracia corporativa del PRI frente a la democracia liberal y católica del PAN.

Con la seguridad que da una maquinaria estatal, el PRI no tuvo grandes obstáculos para derrotar a un panismo incipiente. La ideología de la Revolución mexicana tenía completa representatividad; el partido oficial era ya una institución altamente especializada en las prácticas electorales y las mayorías estaban incorporadas a la dinámica electoral.

El PAN de entonces presentaba un proyecto centrado básicamente en la defensa de la autonomía municipal y en la libertad de educación. Sin una vocación de poder, el joven industrial cerró su discurso de campaña en la plaza pública diciendo: "No voy a insistir en que voten por mí, pero les pido a todos que cumplan con el deber cívico acudiendo a las urnas electorales. Les pido también que rueguen a Dios Nuestro Señor no solamente por los candidatos de Acción Nacional, sino también por los del Partido Revolucionario Institucional."<sup>3</sup>

Frente al pacto corporativo de los años treinta, se oponía una serie de grupos que no tenían más propuesta que su anticardenismo. El escenario del mercado político chihuahuense expresaba ya una primera edición en los cincuenta de lo que fue la pugna electoral 30 años después, ambas circunstancias electorales diferenciadas por rasgos muy marcados, dado que el país y el estado no eran los mismos. La crisis económica, el cambio de perfil en la economía del Estado, la deslegitimación del PRI, el ascenso de los sectores medios como protagonistas de la política y el cansancio sobre la conducción autoritaria de la política fueron, entre otras, las nuevas circunstancias de los años ochenta.

Los resultados electorales en 1956 señalaron un atencencia muy clara: 115 520 votos para el PRI y 49 604 para el PAN.<sup>4</sup> Situar los dos modelos de hacer política nos conduce a una pregunta: ¿cómo se cocina la política electoral?

II. La estructura del PRI, como eje dominante del campo político en

<sup>3</sup> *El Heraldo de Chihuahua*, 18 de junio de 1956.

<sup>4</sup> *El Heraldo de Chihuahua*, 4 de julio de 1956.

México, descansa fundamentalmente sobre las coaliciones populares incorporadas, y tiene una serie de funciones múltiples:

- Consolidar el monopolio de representación política del Estado mexicano, que se nutre del discurso presidencial, las versiones oficiales de la revolución y las adecuaciones constitucionales de cada sexenio.

- Organizar a las coaliciones populares para la movilización electoral dentro de un complejo mecanismo de relación entre líderes, caciques y candidatos, para enfrentar cualquier tipo de oposición en todas las elecciones.

- Negociar entre los diferentes grupos políticos y económicos la real política y el acuerdo sobre la selección de los candidatos.

- Hacer la gestoría y establecer los puentes entre los líderes sindicales y los caciques locales y regionales, con los funcionarios públicos y la burocracia estatal para tramitar obras, favores, premios y castigos.<sup>5</sup>

Con base en estas funciones, el partido oficial ha acumulado un inmenso capital político.<sup>6</sup>

Sobre este capital político, el PRI operó en las décadas del milagro mexicano y logró reclutar a las élites políticas en un pacto institucional con las coaliciones populares dentro de una racionalidad nacional, popular y masiva. A través de este mecanismo se presentaba en la escena política con una fuerte legitimidad difícilmente impugnada.

Este capital político descansaba sobre un amplio conglomerado de grupos que ejercían y practicaban la política de forma disciplinada y jerárquica. En la pirámide burocrática se premiaba el acatamiento y se castigaba la indisciplina. Se hablaba de nacionalismo frente a los Estados Unidos y se abrían al mismo tiempo las fronteras a la inversión extranjera. Existía una dirección en el proyecto económico que apuntaba hacia la modernización industrial del país y se tenía apertura a las organizaciones de masas para canalizar sus demandas sociales; tal vez aquí residía el peso del capital político prístia hasta antes de la crisis.<sup>7</sup>

Por su parte el panismo ofrecía la opción católica y liberal de la política: pensar a la Revolución mexicana por fuera de sus compromisos históricos. Aquí es donde se logró hacer un proyecto nacional y el pacto corporativo de los treinta.

<sup>5</sup> Al respecto se puede consultar el libro de Pablo González Casanova: *El Estado y los partidos políticos en México*. Ed. ERA, México, 1981, pp. 108 y ss.

<sup>6</sup> Si en política "decir es hacer", o hacer creer que lo que se dice se puede realizar, el capital político, que es una forma de capital simbólico, es el crédito fundado en la creencia, en el reconocimiento, o más precisamente en las múltiples operaciones de crédito por las cuales los agentes confieren a una persona o a una institución los poderes mismos que le reconocen. Tomamos el concepto de capital político de Pierre Bourdieu en su artículo "La representation politique, elements pour une theorie du champ politique", en *Actes de la Recherche en Sciences sociales*, núm. 36-37, París, 1981.

<sup>7</sup> Sergio Zermefio plantea cómo se va transitando ahora hacia el fin de estas formas de relación en su ponencia "Hacia el fin del populismo mexicano", agosto de 1986.

Aunque es real y palpable que los compromisos del PRI con sus sectores masivos incorporados se van diluyendo y trasformando en una subordinación que hace más evidente la separación entre el proyecto y el discurso, es también relativamente obvio que históricamente el PAN no ha tenido ningún tipo de compromiso, ni tampoco tiene sectores incorporados, por lo cual el proyecto de democracia liberal que defiende se opone a las formas tradicionales en las que ha cristalizado el Estado mexicano: el ejido, el artículo 3º, el artículo 130, el presidencialismo y el corporativismo sindical, todo ello encubierto ahora en una crítica cerrada en contra de la corrupción.

Los heterogéneos públicos del panismo, que han integrado sus filas desde 1939, son católicos militantes, profesionales liberales, empresarios y sectores diversos de capas medias urbanas en su mayoría.<sup>8</sup> Estos diversos sectores se pueden ubicar en dos grandes líneas ideológicas que responden a sus fundadores: el catolicismo militante de González Luna y el liberalismo de Gómez Morín. Tradicionalmente, con estos discursos ideológicos se construyó su principal oferta ideológica. Es en este sentido que el PAN ha sido visto y analizado como un partido de derecha, en alianza permanente con grupos empresariales y con la Iglesia católica. Aunque ahora, en los ochenta, con los casos como el de Chihuahua, habría que analizar el comportamiento de estas alianzas que le dan los matices más ricos al caso dentro de una perspectiva regional y los nuevos ingredientes que nos trajo la crisis.

Estos discursos no implican que la oferta ideológica panista en el mercado político tuviera un amplio crédito, pues la creencia y las operaciones de reconocimiento que le otorgan legitimidad han girado históricamente en torno a su principal discurso: el antipriísmo, con lo cual la capacidad y las condiciones de orquestación y receptividad no tuvieron éxito sino hasta los últimos años. En esta tesitura sí es factible reconocer que el priísmo era superiormente hegemónico, no sólo frente al panismo, sino también frente a las opciones de las izquierdas, sobre todo si hablamos de eficacia social. Tal vez lo más relevante de esta oferta política panista sea el manejo de una concepción confesional de la lucha por el poder.

III. La cocina política del priísmo elaboró durante varias décadas un guiso atractivo para las grandes mayorías del país. La legitimidad no reposaba en los capitanes del partido, sino directamente en el presidente de la República, y en los planes y programas que el gobierno elaboraba como proyecto nacional.

En cambio, el capital político del panismo se cocinaba sobre impugnaciones poco atractivas a esas mayorías participantes del milagro mexicano y de la movilidad social ascendente. Las críticas del PAN al ejido no remiten a una mayor justicia social, sino a una muy probable reconcentración de la propiedad en el agro, porque si se titulan parcelas ejidales es para

<sup>8</sup> Véase la biografía de Uriel Jarquín Gálvez y Jorge Javier Romero, *Un PAN que no se come*, Ediciones de Cultura Popular. México, 1985, cap. 3.

que ingresen al mercado de la compra-venta o de lo contrario parece un ejercicio ocioso.

El rechazo al artículo 3º, en donde los panistas confluyen con asociaciones de padres de familia, gremios rechazados y con la Iglesia católica, remiten a una concepción de la libertad de enseñanza contraria al laicismo del Estado mexicano. Para la cultura popular religiosa, la separación entre la Iglesia y el Estado es una cuestión asimilada históricamente y no una demanda sentida, por lo cual también el polémico artículo 130, que generalmente se discute en épocas electorales, es más un interés de la jerarquía que de los fieles.

Probablemente a ello se deba que las modernas campañas políticas del panismo, en el norte de los ochenta, no contengan estas impugnaciones como factores centrales de su discurso político, sino la aguerrida crítica al modelo político priísta de la democracia corporativa, altamente desvalorizado por la crisis económica.

En los procesos electorales de los años del desarrollo estabilizador, el mercado electoral expresaba en Chihuahua por lo menos cuatro tendencias importantes: un PRI mayoritario frente a un PAN minoritario; un PRI que fue descendiendo significativamente y que pasó de tener el 80% de la votación a tener el 60%, en tanto que el PAN tuvo ascensos y bajas, pero históricamente nunca descendió del 20% de la votación; una abstención creciente que llegó a rebasar el 50%; y una presencia muy minoritaria y simbólica de las opciones partidarias de izquierda. Estas tendencias se modificaron significativamente a partir de 1982 y 1983.

En Chihuahua, como en casi todo el país, los procesos electorales fueron los rituales del consenso; el PRI y su maquinaria institucional no dejaron de ser los ganadores de siempre; el panismo fue el fiel perdedor y la izquierda estuvo marginada completamente de los procesos electorales, por lo menos hasta la reforma política de 1977-1978. De esta forma, mientras el panismo se debilitaba, la izquierda tuvo participación importante en los movimientos sociales.

En los años sesenta lo importante en Chihuahua no fueron las elecciones; no eran competitivas y sus resultados se conocían desde antes. Lo importante fue el hallazgo del asalto al cuartel de Madera en 1965 y los brotes guerrilleros que pusieron en jaque al gobierno del estado y preocuparon seriamente sobre la legitimidad del sistema político y sus limitaciones para incorporar a sectores disidentes. Todavía al inicio de la década de los setenta, los remanentes guerrilleros tuvieron acciones importantes; en 1971, el triple asalto bancario, concluyó con una represión ejemplar a cargo del entonces gobernador Óscar Flores.

Asimismo, durante los setenta, el conflicto universitario de 1972-1973 y el surgimiento del movimiento social de gran convergencia que dio origen al Comité de Defensa Popular, en donde se aglutinaron sindicatos obreros, colonos y universitarios, fue el principal frente de movilización civil. La izquierda, que de alguna manera comandaba el movimiento, no

pensaba en elecciones, ni éstas eran consideradas como una opción atractiva en ese entonces.

La tradición de estos y otros movimientos sociales comandados por la izquierda en Chihuahua apuntaba hacia una lucha contra la corrupción gubernamental; con este antecedente, la bandera panista de los ochenta, cuando la corrupción se convirtió en un estilo de gobierno y su impugnación se acrecentó, el PAN tuvo una orquestación importante en esta tradición chihuahuense que no es conveniente desechar.

IV. La cocina y el mercado de la política chihuahuense se pueden inscribir en los dos modelos del hacer y del decir en política, como problema de fondo. Durante los años que van de 1940 a 1980, el país cambió radicalmente, aunque algunos digan certeramente que han existido cambios más profundos en los años del delamadridismo que en esas cuatro décadas.

En esos 40 años de historia se escribieron los antecedentes más significativos en el quehacer de la política chihuahuense, que ahora nos indican el nudo de convergencias sin retorno entre lo que fue y lo que será la política en ese estado del norte de México. Como ya lo señalamos en otro espacio: "En ese estado del norte, se vive un acelerado proceso de modernización que en esta crisis política marca y deslinda lo que muere y lo que surge. Lo que muere en Chihuahua es el pacto corporativo en su nivel electoral; la dominación del carro completo con legitimidad. La marginación política de amplios sectores urbanos y rurales. Lo que está surgiendo con fuerza es una insurrección cívica-electoral, sectores medios activos, una sociedad de masas y antenas parabólicas, una integración económica que tiene su punta en la industria de la maquila y una aspiración civil de democracia electoral."<sup>9</sup>

Entre lo que muere y lo que surge, varios factores han ido de la mano. El desgaste del priísmo tradicional, que ha ido perdiendo capacidad de aglutinar a obreros y campesinos en torno a un proyecto que de hecho los arrincona sin salida frente a la política del gobierno que quiere gobernar la crisis a su costa. Situación que tiene que ver cada vez menos con la concertación sindical heredada del cardenismo y más con la nueva etapa de "reconversión industrial". El ascenso de un panismo montado en la cresta de la crisis que ofrece discursos anticorrupción y que fundamentalmente aglutina a una nueva mayoría de sectores medios. Como dice Aguilar Camín: "Si uno quisiera describir sintéticamente lo que ha pasado con las clases medias en los últimos 40 años de México tendría que decir que el manejo de su conducta y de su ideología ha dejado de ser materia exclusiva de las tradiciones católicas y la Mitra, para empezar a ser materia de las universidades, el consumismo, la comunicación masiva y la burocracia estatal. Es quizá uno de los movimientos profundos más decisivos de la sociedad: a partir de la industrialización de los años cuarenta y cincuenta se ha ido constituyendo una nueva mayoría social. No es la

<sup>9</sup> Alberto Aziz Nassif, en "Chihuahua las elecciones de un nuevo paradigma", en la revista *El Cotidiano*, núm. 13, septiembre-octubre de 1986, p. 11.

mayoría tradicional del México viejo [...] Es una nueva mayoría urbana, tiene que ver con los muchachos del 68 y con los votantes por el PAN de los ochenta.”<sup>10</sup>

Además de otros factores que convergen con estos cambios (y que serán tocados más adelante), como la actitud de la Iglesia local, el comportamiento empresarial o los nuevos movimientos campesinos, hay un eje sobre el que se disputa el poder y que cruza directamente el escenario electoral chihuahuense de los ochenta.

Este eje se puede formular como la crisis del modelo priísta frente al ascenso de una insurgencia cívica-electoral. Los aspectos sustantivos de esta situación tienen una racionalidad que los encuadra y que consiste en el cruzamiento de lo que Sergio Zermeño llama “la doble lógica sociopolítica de un país desarticulado”;<sup>11</sup> a lo que hemos llamado la democracia corporativa, correspondería una lógica masivo-popular que recoge las herencias y tradiciones del pacto social de los treinta, y que expresa las imágenes “populistas, patrimoniales, caudillescas y caciquiles” de la forma priísta de hacer política. Esta lógica está sufriendo los reacomodos más fuertes que nunca antes conoció, de la llamada “reconversión nacional” que el núcleo delamadridista expresa como proyecto y que probablemente su sucesor continuará.

Articuladamente a ésta, existe otra lógica que expresa el modelo de la democracia liberal, que retoma las aspiraciones de una sociedad civil que evoluciona hacia nuevas formas de producción, de consumo y de información.

El escenario chihuahuense de los ochenta combina diversas expresiones entre los dos modelos de hacer política y las dos racionalidades sociopolíticas. Grupos urbanos de la nueva mayoría son actores centrales en la movilización político-electoral. Las oportunidades que deja la crisis intensifican la polémica ideológica sobre el hacer-decir de la política y se crean corrientes de opinión que dirimen sus diferencias en nuevas mecánicas de construcción del consenso; se politiza la vida cotidiana. De las expresiones de descontento social surgen nuevas rivalidades políticas que tendencialmente se canalizan hacia los procesos electorales y los convierten en espacios competitivos de la lucha por el poder. También una nueva participación de la jerarquía católica que milita doctrinariamente con documentos cercanos a una especie de teología electoral, que se inscribe en la racionalidad modernizante y se opone a la democracia corporativa. Los sectores empresariales que se inscriben también en una nueva racionalidad productiva, pero que siguen anclados al pacto corporativo en cuyo caso

<sup>10</sup> Héctor Aguilar Camín: “El descenso del milagro mexicano: el sistema político mexicano 1840-1980”, en el libro *Primer simposio sobre la historia contemporánea de México 1940-1980. Inventario sobre el pasado reciente*, INAH, México, 1986, p. 20.

<sup>11</sup> Sergio Zermeño, “De Echeverría a De la Madrid: ¿hacia un régimen burocrático-autoritario?”, en *Revista Mexicana de Sociología*, 2/8, UNAM, México, 1983, abril-junio, p. 486.

la expresión más nítida sería; “que haya democracia electoral pero que la CTM siga controlando al sindicato de mi empresa”.

El aparato estatal que jala hacia una modernización económica y hacia una nueva integración subordinada a la economía norteamericana, sigue conservando las prácticas tradicionales de hacer política ante el temor de tener un sistema democrático competitivo. En casos como el de Chihuahua, estas situaciones tienen un ejemplo.

#### LA GRAN CONVERGENCIA PRE-ELECTORAL

I. Hace casi 10 años, el entonces secretario de Gobernación, por instrucción presidencial, convocó al país a una reforma política para ensanchar los cauces de participación y de representación electoral de la sociedad civil mexicana. La situación era casi intolerable, la crisis de la democracia electoral estaba en su punto más álgido; el presidente López Portillo, más que una campaña política, realizó un monólogo solitario por el país.

Jesús Reyes Heróles apuntó en aquella ocasión: “Cuando no se tolera se incita a no ser tolerado y se abandona el campo de la fratricida intolerancia absoluta, de todos contra todos. La intolerancia sería el camino seguro para volver al México bronco y violento” (abril de 1977, en Chilpancingo, Guerrero).

Estaba todavía lejano el escenario de competitividad electoral que nos trajo la crisis, y el núcleo gobernante pensaba abrir la política para que las minorías y la mayoría convivieran en un nuevo pacto dentro de la ley y el derecho. En ese entonces no se tenía presente qué iba a pasar cuando las proporciones cambiaran y el PRI ya no fuera la histórica mayoría unánime. Ese problema llegaría unos años después del *boom* petrolero y los escenarios regionales del norte del país serían la nueva punta de lanza en las luchas electorales. Ésta es la historia de uno de esos casos regionales.

II. La memoria reciente no ha olvidado el estruendoso campanazo que vivió México aquel 1 de septiembre de 1982, cuando López Portillo nacionalizaba la banca y el final del sexenio llegaba precedido de lo premonitorio: ¿qué pasaría con este país en bancarrota?

Varias liebres saltarían de su asiento para aplaudir al presidente, otros para desaprobar la medida —sobre todo los banqueros— y unos más para ver cómo iban a arreglar el “paquetito”; uno de estos últimos fue Miguel de la Madrid, que tomaría posesión 90 días después.

Un año después surgían los interrogantes sobre los triunfos panistas en Chihuahua, y aunque, como dice Milan Kundera “Los movimientos políticos no se basan en posiciones racionales, sino en intuiciones, imágenes, palabras, arquetipos...”,<sup>12</sup> habría que encontrar simultáneamente la racio-

<sup>12</sup> Milan Kundera, *La insoponible levedad del ser*, Tusquets Editores, 1985, Barcelona. p. 262.

nalidad y la afectividad que encuadran el surgimiento de las luchas electorales allá en aquel espacio norteño vecino del imperio.

Podríamos no estar de acuerdo con Krauze cuando dice que el "apóstol del renacimiento del PAN en Chihuahua fue, por supuesto, el presidente López Portillo, sobre todo por su inolvidable recta final",<sup>13</sup> pero lo cierto es que este momento es definitivo para entender el escenario político chihuahuense.

En este escenario regional existían ya condiciones objetivas e históricas para que pudiera emerger un movimiento electoral de insurgencia cívica. Además de las luchas sociales que ya se han mencionado, y la tradición de luchas que cruza varios siglos, desde las guerras apaches, la revolución villista, hasta la guerrilla del 23 de septiembre en Madera, hay también raíces culturales que Krauze en su "ida y vuelta" captó con nitidez: "una tradición violenta; un profundo sentido de aislamiento; una visión de la vida como desafío; una cultura básicamente criolla, laica, liberal, un autonomismo ancestral; una fidelidad a la raíz cultural española, que por su misma naturalidad y consistencia permite el comercio con lo anglosajón sin implicar, al mismo tiempo, la pérdida del alma; un resentimiento antiguo frente al poder central que fácilmente se traduce en un odio casi racial contra todo lo que llega del sur [...] un concepto instrumental (criollo) y no místico (mestizo o indio) del poder y la autoridad..."<sup>14</sup>

A este catálogo cultural de rasgos norteños, podríamos añadir el tránsito hacia una modernidad que hace del norte mexicano la frontera en donde se procesan cambios sociales y económicos con gran rapidez: una economía tradicional que pasa de tener su punta productiva y de empleo en la agricultura, ganadería, bosques y minas, a una industria de maquila que ahora es la parte más activa en la generación de fuentes de trabajo; una irrupción de la nueva mayoría de capas medias urbanas que reaccionan ante las amenazas a su consumismo y que ahora se logran constituir en uno de los sectores sociales más dinámicos, rebasando el típico cacero-lismo de estos grupos; nuevas formas de comunicación y de información que llegan no sólo con la televisión nacional, sino principalmente por las nuevas tecnologías que significan las antenas parabólicas; sectores empresariales que piensan en aumentar la exportación de mercancías como una vía natural a su situación geográfica, que dependen más de los ciclos económicos norteamericanos que de la política económica que se determina en el centro del país; una Iglesia católica que en su jerarquía no sólo se enfrenta a la proliferación de sectas protestantes, sino que pugna abiertamente por un modelo de democracia modernizante y liberal, que propone un nuevo discurso ideológico cercano a una teología electoral de derechos humanos; grupos campesinos que se enfrentan a las corporaciones oficiales y se aglutinan en torno a reivindicaciones económicas y morales; sectores

<sup>13</sup> Enrique Krauze, "Chihuahua, ida y vuelta", *Revista Vuelta*, núm. 115; junio de 1986, p. 38.

<sup>14</sup> E. Krauze, *op. cit.*, pp. 35-36.

obreros que ya no son convocados por el nacionalismo revolucionario, sino por una democracia sin compromisos corporativos electorales. Todos estos elementos forman en el estado de Chihuahua un nuevo fenómeno: la gran convergencia.

III. Un ángulo de entrada es considerar que el caso Chihuahua consiste en el ascenso panista y la derecha al poder por la triple alianza entre empresarios, clero y los intereses desestabilizadores de Estados Unidos, como lo quisieron ver los priístas, y no sólo a tono con una estrategia de discurso descalificador, sino como una verdadera convicción. Diametralmente opuesto es el punto de vista del profesor Antonio Becerra, líder del PSUM en el estado, que representa una izquierda solitaria; dice él: "En el Comité central hay mucho interés y mucha dificultad para entender y claro que ellos se van por la vía de siempre, por la vía tradicional, por el análisis tradicional que siempre habíamos hecho: el PAN es la derecha, el partido de la derecha, el partido de la reacción, del retroceso, la tranca del fascismo y todas esas cosas, pero a la hora de interpretar [...] son fenómenos que no se pueden explicar nomás así [...] ¿por qué hace unos años el PAN no atraía a los jóvenes, mujeres, campesinos, ni a los viejitos?, y ahora es un centro de atención política que da envidia. Para los que trabajamos en esto de la política y sabemos lo que son las masas, yo me pongo en una esquina y veo qué entusiasmo, qué agresividad, qué combatividad, qué euforia, qué confianza y éstos son los hechos, los fenómenos están ahí; gente que jamás se había interesado en la política [...] gritando la democracia."

El profe Becerra, como lo llaman, es un ilustre luchador de la izquierda local, que participó en los movimientos sociales de los setentas y que fue protagonista en el movimiento universitario; en 1986 fue el candidato a la gubernatura por el PSUM. Su punto de vista tiene la originalidad de hacer un intento serio por entender el escenario chihuahuense por fuera de los tradicionales esquemas de la izquierda. Señala que existe una especie de radioactividad que escapa a las viejas clasificaciones y que aparentemente presenta una realidad llena de contradicciones, que tiene que ver más con lo espontáneo, con las sorpresas y los absurdos.

El escenario chihuahuense está íntimamente relacionado con una crisis de la moral política, en donde el ciudadano quiere rescatar una dignidad perdida, y lo que se valoriza es dar la cara y enfrentarse con los viejos moldes políticos del priísmo. El poder ya puede ser un reparto patrimonial o caciquil, pero ahora tiene que ganarse en las urnas; ésa es la tesitura en donde las afectividades inundan los momentos plásticos del movimiento.

Dignidad y orgullo, celosamente cultivados por un sentimiento regional, son el marco de valores transclasistas que son compartidos por estratos de clase diversos. En juego también está lo "elementalmente humano"<sup>15</sup> y que en esta coyuntura es descifrable como un anhelo democrático; en estos

<sup>15</sup> Término que emplea el antropólogo italiano Alberto Cirese para explicar lo que no es atributo de clase, como la religiosidad, el sexo, la afectividad, la raza, la edad, etcétera.

ingredientes tiene su germen la gran convergencia. Sobre esta valoración se montó el discurso panista.

IV. Casi 30 años después de aquella lejana confrontación de 1956, Luis H. Álvarez llegaba a la presidencia municipal de Chihuahua; era el año de 1983 y el crítico sexenio apenas se iniciaba. Ese día que ganó dijo: "no es un triunfo de Acción Nacional, es un triunfo del pueblo de Chihuahua". Simultáneamente, en Ciudad Juárez, un joven desconocido ganó también la alcaldía y con ello el PRI sufrió una de sus más grandes derrotas, perdió las principales ciudades del estado y 5 de las 14 diputaciones locales.

El proceso electoral de 1986 tiene otro antecedente, que completa el cuadro: las elecciones de 1985 para elegir a los 10 diputados federales del estado de Chihuahua. Estas elecciones sirvieron para confirmar la tendencia de 1983; el PRI volvió a perder 5 diputaciones; el PAN ganó las tres de Juárez y una más en la capital. Este proceso de 1985 fue un termómetro para determinar la evolución del proceso. Después vendría 1986 y la doble pregunta: ¿tendría capacidad de recuperación el PRI?, ¿se podría consolidar el panismo?

La disputa por las curules federales fue el último ensayo antes de la pelea fuerte, la que en 1986 involucró a los grupos, partidos y actores sociales que participaron en el proceso electoral y que lograron demostrar una cosa: la gran convergencia de una sociedad civil que se movilizó en contra de la democracia corporativa del priísmo y pugnó por una democracia competitiva.

Durante el período de 1983 a 1986, se presenciaron en Chihuahua varios cambios importantes, a través de los cuales se puede detectar las diferencias sustantivas de uno a otro proceso electoral.

En 1983, lo importante fue la novedad; el factor sorpresa fue un imponderable decisivo, que prácticamente sirvió para que las elecciones se respetaran y que no se instrumentara una operación fraudulenta.

La percepción subjetiva de muchos chihuahuenses configuró una visión sobre la crisis del país que sirvió como argumento no explicitado de las campañas electorales; es decir, orquestó un discurso callejero como una ecuación: "PRI + gobierno + corrupción = causantes de la crisis." Las interpretaciones sobre el proceso económico rondaron sobre tres líneas confluente: a) Una conciencia de que la crisis en Chihuahua tenía menor afectación que en otros estados, porque se lograron conservar los niveles de empleo y de inversión en las principales ciudades; salvo en el caso de Ciudad Juárez por ser frontera, se vivió una situación más difícil, tanto por el control de cambios como por la devaluación del peso. Esto obedece al axioma de que cuando el peso está sobrevaluado la frontera vive feliz. b) Un malestar en los sectores empresariales por la nacionalización de la banca, que logró trasminar a otros sectores sociales, conformando un resentimiento por el alto nivel de intervención estatal y por el rompimiento de las reglas del juego; de aquí salieron varios de los nuevos cuadros panistas que eran jóvenes empresarios. c) Un discurso generalizado en contra

de la corrupción, del centralismo y del gobierno lópezportillista como su símbolo, que tuvo inmediatas traducciones locales en el PRI de Chihuahua.<sup>16</sup>

Por otra parte, tuvieron lugar acontecimientos que despegaron directamente de la nacionalización de 1982, como el surgimiento de las asociaciones y frentes cívicos, que involucraron a grupos amplios de señoras, jóvenes y empleados, en una disposición a participar políticamente en contra del priísmo, lo cual politizó a importantes sectores de la población en una afectividad clave para el momento.

Otro factor fue la participación de la Iglesia, y concretamente del arzobispo Almeida que publicó un extenso catecismo: "Votar con responsabilidad", con un cuerpo doctrinario para los católicos que sirvió de referencia obligada en el proceso político. En este documento y en sus condiciones de emisión se pueden destacar tres estrategias ideológicas que fueron eficaces: "destacar la legitimidad de la Iglesia para participar en política como la voz autorizada para los cristianos; con esta premisa de validez, la Iglesia condena de hecho las ideologías adversas a la suya y vuelve al ámbito valorativo del deber ser; establece como un deber del cristiano la participación política y el voto y, como conclusión, le da un contenido al voto cristiano: que sea por el partido que busque los cambios profundos en la sociedad".<sup>17</sup>

En 1983 fue fundamental la situación en la que se encontraban los partidos políticos. El PRI, como lo dijo uno de sus miembros, ¡aquí está muerto!; en ese año se hizo público y evidente el desgaste que ya tenía para ese entonces. Sus sectores incorporados no tenían capacidad de convocatoria electoral y se había mermado su labor de gestión característica; pasaba además por una serie de pugnas internas producto de la inercia del poder cuando no hay necesidad de competir. Aquí radica el argumento priísta de que "nos ganaron porque nos confiamos".

El PAN, por su parte, se preparó con recursos económicos, y con una estrategia de campaña diseñada para apoyarse en los acontecimientos que ya se habían generado en la sociedad civil y supo capitalizar no sólo el descontento existente, sino montarse en los indicios de la convergencia social antipriísta que ya en 1983 era patente en la escena política norteña, y de ser un partido minoritario, pero con experiencia electoral, creció como bola de nieve.

Los partidos de izquierda tuvieron una presencia marginal durante el proceso político, que se expresó en los escasos votos obtenidos; y como dice el profe Becerra, la izquierda mostró su desconfianza en los procesos electorales.

<sup>16</sup> A conclusiones similares se llega en el trabajo de Tonatiuh Guillén, "Tendencias políticas y crisis económica en tres ciudades del norte de México", manuscrito, El Colegio de la Frontera Norte.

<sup>17</sup> Alberto Aziz Nassif, "La coyuntura de las elecciones en Chihuahua 1983", en *Municipios en conflicto*, UNAM-GV, México, 1985, p. 95. En este trabajo se hace un análisis ideológico del documento.

Las elecciones de 1983 marcaron una nueva tendencia bipartidista en Chihuahua: de un total de 400 mil votos aproximadamente, el PRI tuvo 194 mil y el PAN 190 mil. Esto significó para el partido oficial una conservación de su votación en los distritos y municipios rurales y una pérdida en las ciudades; en cambio, para el blanquiazul fue un salto cualitativo en las zonas urbanas, y tal vez lo más relevante fue que la mayoría de esos votos fueron nuevos y expresaron a variados grupos de ciudadanos que eran abstencionistas y prácticamente marginales del proceso político. En los últimos 20 años, las elecciones no lograron interesar ni a la izquierda ni a las minorías panistas, ni mucho menos a los sectores medios que en ese lapso sufrieron la gran metamorfosis.

Después de las elecciones de 1983, el estado de Chihuahua vivió una constante lucha política, que se trasladó de las urnas a los ayuntamientos y al congreso local. El PRI, como dicen algunos de sus miembros más críticos, cerró las oficinas después de la campaña y se fue a su casa a descansar como es su costumbre, pero esta vez, en lugar de hacerse gobierno como es su costumbre, se dedicó a restregarse sus errores y a depositarlos en factores externos. En tanto que el PAN no dejó de tener una presencia simbólica en los puestos que ganó, y que se convirtieron en los nudos del conflicto, donde se desarrolló, durante esos tres años, una parte importante de la lucha política e ideológica.

Dos años después se repitió un proceso electoral en condiciones similares, salvo que en esa ocasión ya no se contó con el factor sorpresa. Se volvió a confirmar la tendencia de votación bipartidista y las cifras permanecieron casi iguales a las de 1983.

El escenario de 1985 tuvo a un debutante, el CDP, que había sido abstencionista militante y enemigo de los ayuntamientos panistas; el CDP participó con el registro del PRT y sólo obtuvo cerca de 8 mil votos en todo el estado. Los forcejeos empezaron a manifestarse y hubo un cambio de actitud de los priístas, que se prepararon de otro modo, hicieron una campaña de prensa y radio más moderna y seleccionaron mejores candidatos, es decir, más populares, vincularon el programa de obras públicas con el ofrecimiento de sus candidatos en campaña y se invirtieron varios miles de millones de pesos. Para su desconcierto, los priístas observaron que las votaciones en las zonas urbanas fueron por los colores y no por las personas. El PRI tuvo votaciones bajas en 9 de los 10 distritos federales, y sólo el entonces candidato a diputado Fernando Baeza logró repuntar la votación en su distrito para el partido oficial.

El clima cambió, y mientras que en 1983 las elecciones se realizaron en completa paz, pues nadie esperaba los resultados, ahora la hostilidad fue un ingrediente que condimentó la sopa, tanto en las casillas, como en la lucha que se hizo después del proceso electoral; los actos públicos del PAN fueron más nutridos después de las elecciones; se ensayaron recursos nuevos para la defensa de las votaciones, se constituyó un tribunal popular para calificarlas y se hicieron huelgas de hambre de los alcaldes

panistas. Los resortes de la legitimidad priísta no lograron traspasar el descrédito acumulado.

Estas dos elecciones se llevaron a cabo, a pesar de todo, con las mismas reglas del juego, tanto en la competitividad electoral como en el código normativo. En ambos casos se respetó la regla de oro, la de la mayoría.

En Ciudad Juárez la técnica alquímica consistió en no computar casillas, lo cual no resultó para el PRI, pues con todo y que se contabilizaron unas cuantas casillas, la proporción favoreció al blanquiazul.

En este cambio de clima político hubo una emergencia de variadas formas para la defensa del voto; la lucha más intensa se dio después de las elecciones. Se ensayó un nuevo modelo de lucha civil contra el fraude,<sup>18</sup> se constituyó un tribunal popular que emitió un juicio moral sobre las elecciones; algunos alcaldes panistas se pusieron en huelga de hambre y otros hicieron marchas a la capital del estado.

La tendencia bipartidista se volvió a expresar en el ánimo del electorado; esta vez el PRI obtuvo 234 mil votos y el PAN 220 mil reales, aunque le fueron reconocidos oficialmente sólo 147 mil.

Después de las elecciones que volvieron a favorecer al PAN, quedó más o menos claro que este partido había dejado de ser aquel grupo pequeño de unas cuantas familias católicas de antaño y se había transformado en un partido que retaba a la hegemonía priísta.

Simbólicamente, las elecciones de 1985 expresaron el ánimo electoral que podría existir para el año siguiente. La situación poselectoral se complicó, el rumor de que el gobernador Óscar Ornelas caería se acrecentó por un amplio reportaje del periódico *Excélsior*, cuyo primer titular a ocho columnas fue: "Al garete el mando político en el estado de Chihuahua" en aquel cálido agosto de 1985. Un mes después, precedido por un conflicto universitario, el 19 de septiembre de forma casi inadvertida por el terremoto, Ornelas presentaba su renuncia y el titular de *Excélsior* veía realizado el presagio. Con esta renuncia, el PRI y el aparato estatal empezaba a preparar su nuevo proyecto para las elecciones de 1986.

El conflicto universitario de septiembre abrió la crítica en contra del gobernador; el principal reclamo que se le hizo a Ornelas fue su falta de control político, que según los priístas había ocasionado las derrotas de 1983 y de 1985. En esta racionalidad oficial, se necesitaba un gobernador que garantizara unas elecciones con predominio priísta. Fidel Velázquez dio el tiro de gracia y declaró enfático: "No ha habido nada importante que pueda alabarse del gobierno que dirige Óscar Ornelas" (*La Jornada*, 6 de septiembre de 1985).

La maniobra para quitar a Ornelas del camino también estuvo vinculada con la mayoría que conservó el PRI en el congreso local, pues los resultados de 1983 le quitaron este porcentaje de las dos terceras partes, ya que perdió 5 de los 14 escaños; sin embargo, mantuvo congelado el iv

<sup>18</sup> Según los panistas, les hicieron un fraude en el 7º Distrito de la ciudad de Chihuahua, y ése fue el motivo aparente de la protesta civil.

distrito local de Ciudad Juárez y en 1985, en una elección extraordinaria, lo volvió a perder y otra vez lo dejó congelado. Con esta curul activa en el congreso se hubiera complicado la salida del gobernador.

El proyecto priísta para las elecciones de 1986 empezó con la salida del gobernador y, aunque todavía no enseñaba sus demás cartas, el PRI de Chihuahua tenía enfrente un serio problema: ¿cómo derrotar a una sociedad civil que se había tornado antipriísta y que ahora era protagonista de esa gran convergencia por una democracia electoral?

#### UN LARGO Y SINUOSO PROCESO ELECTORAL

I. *Las etapas.* Las elecciones para elegir gobernador en Chihuahua empiezan prácticamente un año antes. El banderazo de salida es el cambio de Óscar Ornelas por González Herrera. Desde ese momento queda claro para los priístas que la estafeta del interino sería entregada al futuro candidato del partido oficial y no a un posible gobernador de la oposición.

Las etapas del proceso electoral pueden distinguirse por los acontecimientos que van a movilizar políticamente a los principales actores del escenario chihuahuense.

En otra parte señalamos que en estas elecciones hubo cuatro fases o etapas: *a)* de la caída del gobernador Ornelas en septiembre de 1985 a las reformas a la ley electoral (Código Administrativo), en diciembre del mismo año; *b)* de las postulaciones de los candidatos en diciembre de 1985 y en enero de 1986 al 6 de julio, día de las elecciones; *c)* del 7 de julio, etapa de lucha poselectoral contra el fraude al día de calificación de las elecciones en agosto, por el congreso del estado convertido en Colegio Electoral; *d)* de la calificación y nombramiento del nuevo gobernador a la toma de posesión en octubre.<sup>19</sup>

Dentro de estas cuatro etapas se llevaron a cabo las elecciones chihuahuenses; en un clima de mucha polémica, y expectación se cumplió puntualmente con el calendario electoral. La racionalidad oficial y la de oposición se enfrentaron en una serie de tácticas y estrategias que marcaron las formas de hacer política, los límites de la democracia electoral en México y sobre todo el escenario en donde se desarrolló un largo y sinuoso proceso electoral.

El tratamiento que había recibido el caso Chihuahua por parte del aparato estatal había sido hasta entonces diferente respecto de otros, pero ahora, por la lógica del poder, se impuso que ya no tenía que ser la excepción. En 1985 hubo tres casos importantes que fueron conflictivos: Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí.

La expectativa de que Chihuahua pudiera ser diferente fue tal vez el principal ingrediente para que el caso interesara a estudiosos y a la prensa

<sup>19</sup> Aziz, Alberto, *op. cit.*, 1986, p. 11.

nacional y extranjera y tuviera una resonancia poco común tratándose de unas simples elecciones estatales.

Aunque la discusión de fondo se puede centrar en varias preguntas clave, hemos seleccionado dos para situar los marcos de las expectativas: ¿es factible que el sistema político mexicano esté en condiciones de soportar una gubernatura de oposición?, y ¿es realista suponer que puede llegarse a dar una gubernatura de oposición ahora? Los hechos consumados nos indican que por ahora no es factible y tampoco realista, pero veamos por partes por qué no y cómo se desarrolló el caso, que puede ser ejemplo para otras elecciones y para el optimismo de la oposición en un futuro cercano.

II. *La ley.* Ante las amenazas de poner en cuestión una gubernatura, el PRI y sus distintas conexiones institucionales, organismos corporativos, el aparato estatal, el presupuesto y el control sobre la legislación electoral, fueron recursos y capacidades que se usaron para preparar el caso Chihuahua.

Dentro de la racionalidad oficial priísta era necesario cambiar las reglas del juego y transformar los riesgos en seguridades. En diciembre de 1985, el PRI da el segundo paso en su estrategia: después de haber quitado a Ornelas, cambia la legislación electoral.

En una de las últimas sesiones del congreso local, como un punto a tratarse en asuntos generales, se da lectura a las reformas al Código Administrativo del estado de Chihuahua (Libro IV) sobre materia electoral.

Se modificaron 25 de los 113 artículos que integran el Libro IV, "de los partidos políticos y procesos electorales". De estos cambios se pueden destacar, por sus implicaciones políticas para unas elecciones, los siguientes: a) Sobre la Comisión Estatal Electoral. La reforma tuvo dos componentes: reforzar la composición priísta de la CEE y asegurar ciertas atribuciones discrecionales para la vigilancia del proceso a la mayoría priísta. Si se revisa la integración de los organismos de este tipo en el resto de los estados del país, Chihuahua es la excepción en el mayor número de miembros oficiales, por lo cual esta CEE tiene una sobrerrepresentación del siguiente tipo:

- tres miembros que designa el gobernador, el primero será el presidente y los otros dos vocales;
- el director de gobernación;
- cuatro miembros del poder legislativo;
- uno por cada partido;
- un notario en funciones.

De esta forma el PRI tiene 10 votos seguros, más los de los partidos paraestatales (PST, PPS y PARM), con lo cual alcanza 13 votos. En los demás estados, la integración es más simple: un presidente que generalmente es el director de gobernación, dos comisionados 'del poder legislativo (uno por cada partido político) y un notario.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Se puede consultar el estudio de Jorge Madrazo, "Reforma política y legis-

b) Sobre la propaganda. Se reformó para sancionar con la cancelación del registro de la planilla al partido que hiciera cualquier tipo de propaganda 3 días antes de la elección.

c) Sobre los representantes de casilla. Se añadió la necesidad de comprobar una residencia de cuando menos 6 meses en la sección.

d) Sobre el cómputo. La reforma indica que sólo será válida el acta que se encuentra dentro de la urna y ya no la de los representantes de casilla.

De la letra a la práctica se vieron con claridad los resultados políticos de la reforma. La CEE votó todos los acuerdos con una dinámica de trece contra cuatro votos (PSUM, PAN, PMT, PRT).

Las atribuciones del presidente de la CEE para nombrar auxiliares de forma discrecional operó, y además se restringió a sólo tres el número de representantes generales de los partidos para vigilar la elección en los distritos y municipios, reducción sospechosa donde hay casos urbanos de más de 300 casillas o casos rurales con una geografía de complicado acceso.

La propaganda negra se hizo, aunque no operó la sanción: en la madrugada del 6 de julio se repartieron anónimamente volantes falsos del PAN en lugares públicos de la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Con las actas se posibilitó la táctica de cambiarlas y con los 6 meses de residencia se destapó la facultad de que los controles sindicales tuvieran más eficacia.

En diciembre de 1985 las reformas electorales generaron una amplia reacción en contra que comandó principalmente el PAN, movilizaciones, huelgas de hambre y una protesta generalizada a la que se hizo caso omiso y se guardó silencio. Con estas reformas se dio cauce a una competencia más desigual, cuya finalidad política evidente fue complicar el proceso electoral y debilitar a la oposición; a pesar de que oficialmente se afirme lo contrario y se haga una defensa sobre la equidad jurídica y lo impersonal de la ley, lo cierto es que la reforma tenía destinatario con nombre y apellido, prácticamente por ser una reforma *ad hoc* para el caso.<sup>21</sup>

III. *Los candidatos: Baeza, Barrio y Becerra.* Mientras la polémica sobre el cambio de las reglas del juego llegaba a puntos álgidos, en esos días vino el destape; Fernando Baeza era designado como precandidato a la gubernatura por los 3 sectores del PRI y se daba otro paso en la estrategia oficial: el hombre.

Cuando no puedes vencer al enemigo, únete; o por lo menos, haz como que te le pareces; y así fue. Baeza era el producto más acabado de un híbrido priísmo de derecha, con origen panista y demócrata cristiano en su juventud y fiel seguidor de Óscar Flores; aquí el PRI tuvo razón; era su mejor opción para ese momento y frente a ese enemigo. Un candidato como Baeza era conciliador para el momento y de sobrevi-

lación electoral en las entidades federativas", en el libro *Elecciones en México, evolución y perspectivas*, coordinador Pablo González Casanova, Ed. Siglo XXI, México, 1985, pp. 289-328.

<sup>21</sup> *Chihuahua, proceso electoral 1986*, firmado por el gobierno del estado.

vencia para el PRI; su misión era derrotar al PAN, su discurso la autocrítica, su táctica la conciliación y sus recursos todos los que pudiera darle la federación.

Originario de Delicias, centro agrícola del estado de Chihuahua, miembro de una familia panista, educado con los jesuitas, Baeza hizo su carrera política a la sombra de Óscar Flores; fue su secretario particular en la gubernatura, después fue presidente municipal de su tierra natal y sin terminar el período pasó a la Procuraduría General de la República, de donde salió para ser diputado federal en 1985 y ser el 20 de diciembre la salvación del PRI.

Su tarea no sería fácil; tendría que trabajar y convencer de que él era una opción válida y un candidato distinto de la imagen desprestigiada del PRI. Por lo pronto, desde el destape, era ya el hombre de confianza de los grandes empresarios del estado como Vallina, Bermúdez y otros.

Tendría que hacerse de un discurso ideológico impenetrable a la crítica externa, y a la vez de autocrítica y sortear las impugnaciones de su pasado reciente; Baeza había sacado de apuros a la procuradora del D. F., Victoria Adato, cuando el terremoto del 19 de septiembre puso literalmente al descubierto los métodos de tortura que sufrieron un grupo de colombianos acusados de narcotraficantes, y él desde la Cámara de diputados sirvió de pasaporte para que la señora no tuviera que enfrentarse a explicar el hecho ante los honorables diputados.

Un mes después, el PAN celebró su convención estatal y decidió rumbo entre sus tres precandidatos: Luis H. Álvarez, Francisco Barrio y Villarreal Posada, alcaldes de Chihuahua, Ciudad Juárez y Parral, respectivamente.

Aquel joven desconocido que ganó en 1983 la presidencia de Juárez era Barrio; en esos tres años logró obtener un liderazgo importante y marcó el nuevo estilo de hacer política del PAN; su táctica fue la resistencia pacífica y en la frontera impuso su forma de hacer las cosas. Para los panistas era un líder nato; para sus enemigos era un "alocado carismático". Alguna vez, un periodista de la frontera señaló que ahí existía más un "barrismo" que una ideología panista.

En la convención ganó Barrio sobre Álvarez con una votación de 582 contra 190 votos. Después de la designación, Luis Álvarez salió a encabezar una "caravana de la democracia", por varias ciudades del país, que finalizó en Querétaro, al igual que en 1956, y Barrio empezó la campaña política.

Originario de Satevó, casi 10 años más joven que Baeza, Barrio había sido un aguerrido alcalde; enfrentó a los grupos populares y los reprimió, pues para eso era el poder público, según él; quiso aglutinar a los más de 40 mil "cholos" de Juárez y formó un programa de trabajo con ellos, que fracasó; no tuvo prejuicio en declararse abiertamente practicante católico y carismático. Barrio era egresado de la Universidad de Chihuahua y había sido líder empresarial en la frontera; trabajó para Jaime Bermúdez y fue uno de los creadores del Frente Cívico. Su carrera política había sido rápida y los panistas consideraron que era su mejor opción.

El estilo de Barrio era polémico; una especie de "Ghandi esquina con Pancho Villa", dijo un periodista. El día que ganó la candidatura dijo: "Vengo a ponerme a disposición de mi partido y la patria. Estoy listo, con la ayuda de Aquel que todo lo puede, para asumir la responsabilidad al frente del gobierno del estado."<sup>22</sup>

Los partidos de izquierda marcaron dos formas de hacer política para su participación electoral; el CDP-PRT postuló a Rubén Aguilar para la gubernatura y se lanzó con una campaña por el pobrerismo, con el lema "arriba los de abajo". El PMT quiso lanzar a una mujer a la candidatura, pero fue descalificada por no cumplir los requisitos, a juicio de la CEE. El PSUM lanzó al profe Becerra con una campaña por la democracia electoral.

Desde el principio, los partidos de izquierda, en sus dos estilos, CDP-PRT y PSUM, tuvieron poca presencia pública y contaron con escasos recursos. Pero tal vez lo más grave, dice el propio Becerra, sea que la izquierda no confía en las elecciones y por lo tanto no logra convencer. El PSUM se pasó casi 6 meses discutiendo si era conveniente participar electoralmente, y cuando decidió que sí, una gran parte de sus integrantes se replegó y no hizo campaña.

Mientras el CDP se dedicó a impugnar al PAN, Becerra y la parte del PSUM que sí le entró al proceso entendieron de otra forma el momento político e hicieron una campaña por recuperar "la dignidad", que para el momento político era el discurso en boga. En esa comprensión, Becerra se lanzó por la defensa del voto y también impugnó las reformas electorales. En cambio, el CDP se dedicó a hacerle el trabajo al PRI en las colonias que controla, y el día de las elecciones expulsó a los representantes de casilla del PAN.

Así marcaron los partidos de izquierda sus campañas electorales: uno por derrotar al PAN al costo que fuera y otro por defender el voto, independientemente de quién se tratara.

Becerra era el mayor de los candidatos, un viejo líder de izquierda que fue miembro del Partido Comunista, y actualmente es el líder del PSUM en el estado. Su estrategia fue comprender que en ese momento lo que los chihuahuenses querían era elecciones limpias; supo desde un principio de las nulas posibilidades de triunfo, pero su presencia sirvió para darle prestigio a la izquierda que representaba y tuvo la sensibilidad política para formar parte de la gran convergencia electoral que la sociedad civil en Chihuahua quería. Es el crítico más mordaz de la misma izquierda y su prestigio de luchador independiente valió para que en aquel estado norteño la izquierda tuviera una importante presencia simbólica como oposición política, aunque los ortodoxos lo tacharan de pansumista.

IV. *Los proyectos.* Con las reformas a la ley y con estos candidatos se iniciaron las campañas políticas. La pequeña historia de estos 6 meses de contienda electoral está formada por miles de detalles, anécdotas y acontecimientos importantes. El registro exhaustivo de todos ellos nos llevaría

<sup>22</sup> Información Procesada de Chihuahua, enero de 1986, p. 32.

a un largo escrito, no menos importante, pero de otro carácter, por lo cual hemos seleccionado los acontecimientos más relevantes para dar cuenta de este largo y sinuoso proceso electoral.

La distinción fundamental de las elecciones de 1986, respecto a las dos anteriores, fue que se trataba de jugarse una gubernatura. Simbólicamente implicaba que los partidos políticos contendientes tendrían que presentar un proyecto estatal para los próximos 6 años.

El proceso electoral chihuahuense caminó sobre dos pistas simultáneamente: los programas de gobierno que el PAN presentó en forma de plataforma, y el PRI, como un programa básico; y la otra fue la lucha electoral propiamente dicha. Esta distinción es importante porque en Chihuahua lo que menos se discutió y se socializó fueron los planes y programas, y lo que ocupó la escena electoral fue la pugna abierta entre la necesidad del PRI por legitimarse como una opción válida y las impugnaciones panistas, de forma anticipada, contra el fraude.

Como todo proceso político, éste estuvo inundado de afectividad. No se discutía si Barrio presentaba un proyecto diferente al de Baeza, o si este último proponía un plan más viable para el estado. Lo que apasionaba a la gente eran los pequeños detalles de la lucha electoral: si el PRI gastó tantos millones o si el PAN sacó un desplegado; si tal candidato tenía antecedentes en una organización empresarial o si era “decente” y aseguraba un “buen gobierno”; lo que destacaba no era que el arzobispo Almeida dijera tal argumento, sino simplemente que había hablado.

Esta polarización de afectos se orquestaba en la interiorización subjetiva que los ciudadanos hacían del proceso electoral. Sobre una matriz afectiva se dio la lucha política e ideológica, como una estrategia de desplazamientos para rebatir al contrario.

Aunque tradicionalmente la cultura política en Chihuahua había llevado a un desinterés de la ciudadanía por los planes del gobierno y las opciones políticas, ahora había un ingrediente nuevo: el interés de la gente por participar, discutir, confrontar; las campañas eran el tema obligado en los cafés, las escuelas, el trabajo, la calle y por supuesto en el ámbito familiar, donde frecuentemente se daba el bipartidismo casero.

Simultáneamente se iba dando un doble proceso político: la modulación que hacían los partidos contendientes en los medios masivos de información, y la que hacían los chihuahuenses en su vida cotidiana; entre las dos existía una serie de relaciones que dependían de la cercanía o lejanía que se tuviera del proceso político, de las simpatías y antipatías respecto a un partido o a un candidato.

Parte de esa cultura política ha contribuido a que los planes y programas de gobierno en México, desde los que se presentan en campaña, hasta los que emite el gobierno, sean considerados como meros discursos en sentido peyorativo. Sin ser ajeno al hábito de planear para decir y no para hacer, el PRI presentó un plan básico, con una hechura de grandes generalidades, en donde se plantearon los problemas del desarrollo económico

y social del estado, los objetivos y las acciones que el partido oficial consideró prioritarios.

Por su parte, el PAN hizo lo suyo en una plataforma de gobierno con un carácter similar.

Formalmente, entre ambos proyectos existe una serie de similitudes, sobre todo en el renglón del desarrollo económico y el fomento industrial, y también hay diferencias importantes en cuanto a la relación entre gobernantes y gobernados o entre gobierno y sociedad civil. Mientras el PRI dedica sólo una pequeña parte introductoria a hablar sobre la comunicación entre ambos, el PAN plantea una sección significativa a decir que pugnará por terminar con los acarreos, estimular la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos y establecer un régimen de respeto con los medios de información.

Políticamente, la construcción del proyecto panista está más acorde con los lineamientos de un modelo liberal democratizante; en cambio, la propuesta priísta se queda en los esquemas ya conocidos del proyecto presidencialista en turno: fortalecer el federalismo, autonomía municipal, fiscalización de los fondos públicos, es decir, un delamadridismo estatal. Los panistas proponen cuatro aspectos: derogación de la ley electoral, división efectiva de poderes, respeto al municipio y mayor participación de la sociedad civil.

Ambos proyectos tenían como referente obligado el comportamiento de panistas en los municipios y de priístas en el gobierno estatal, y sobre estas experiencias la ciudadanía recibía los planes de los partidos.

En términos ideológicos, Baeza ofrece a Chihuahua el proyecto delamadridista cuatro años después, cuyas propuestas ideológicas de base son: renovación moral, democracia interna, federalismo y un amplio programa de obras e inversiones públicas. Reivindica al partido oficial, pero toma distancia de él. Necesita generar un discurso mínimamente creíble y acepta las divisiones internas del partido; incluso, quiere "democratizar", pero no más allá de los compromisos con líderes, caciques y empresarios; critica a la Iglesia que se mete en política y descalifica a la oposición panista: la califica de electorera y de no tener proyecto; quiere conciliar, pero al mismo tiempo necesita sobrevivir con la estructura tradicional del partido.

Baeza intenta tripular un partido dividido y a cada momento la imagen de unidad de la mercadotecnia se nubla ante la terca realidad; se da una separación entre el gobernador interino y el candidato; los sectores del partido caminan poco y separados de la coordinadora de la campaña; saltan priístas desilusionados; las promesas de la campaña no articulan compromisos con la base corporativa del PRI, y se da una relación inversamente proporcional en las alianzas con las fracciones dominantes; las masas aparecen en los actos públicos y se maniobra principalmente con el sector magisterial.

Los sectores corporativos presentan un desgaste que se hace evidente en una sociedad politizada; el caso del 7º distrito en 1985 puso al descu-

bierto el descontento de los obreros cetemistas que rechazaron la imposición jerárquica del líder que impuso Fidel Velázquez; de esta forma, el señor Zapata llegó a la diputación sin consenso y mediante un fraude. Los campesinos del noroeste del estado lograron el aumento a los precios de garantía de sus cosechas como una excepción en el país a pesar de la CNC y la Liga de Comunidades Agrarias contra las que tuvieron que luchar por sus demandas, con lo que se evidenció también el estado de débil gestoría de los organismos campesinos oficiales.

Barrio ofreció un proyecto ampliado de lo que fue su paso por la alcaldía de Ciudad Juárez: modernización de las prácticas de gobierno, servicio civil de carrera a burócratas y funcionarios, academias de policía para su profesionalización y un manejo transparente de los recursos.

Ideológicamente, su lema fue "ya es tiempo"; y le imprimió a su campaña un fuerte contenido afectivo y de sensibilización contra el fraude, la anticipación como estrategia y el triunfalismo como discurso.

Barrio comandó a un PAN en ascenso y aprovechó la cresta de su liderazgo que ensayó en Ciudad Juárez durante más de dos años. El modelo político de Barrio es el neopanismo: un estilo empresarial de hacer política y de administrar los recursos (para los panistas, el municipio fue una empresa prestadora de servicios); puso en operación la práctica de lucha civil contra el fraude y aglutinó a amplios sectores descontentos contra el prisma tradicional; atacó de forma cerrada el modelo corporativo y las prácticas del acarreo y como un rasgo fundamental y tal vez el más importante, protagonizó una vocación de poder que el PAN tradicional nunca antes tuvo.

Mientras Baeza hablaba de concordia, Barrio impugnaba y emitía un discurso incendiario. Baeza trataba de ser conciliador y Barrio lo retaba públicamente a un debate que nunca se realizó.

Entre ambos proyectos no estaba en cuestión el desarrollo económico y la modernización maquiladora del estado, ni las formas en las que Chihuahua seguiría su crecimiento hacia la economía de maquila. No había un planteamiento de orientación popular; en los dos casos, se aspiraba a la legalidad vigente, salvo en materia electoral.

El tercero fue Becerra, que tripulaba un PSUM dividido internamente y se lanzaba a una campaña prácticamente simbólica y con escasos recursos. Propuso la defensa del proceso democrático y el respeto al voto; concentró sus recursos en algunos municipios de la sierra en donde tenía trabajo de base y ahí hizo la mayor parte de su campaña, en Zaragoza donde ganó en 1983, en Gómez Farías, Namiquipa y Bocoína. Becerra es un factor crítico respecto al PRI y al PAN.

Entre diciembre de 1985 y enero de 1986, mientras los partidos se preparaban para la contienda electoral, en el noroeste del estado miles de campesinos se preparaban para dar una lucha por mejorar los precios de garantía y toman las bodegas de la CONASUPO. Con una organización de varios años, los campesinos de la Unión para el Progreso de los Campesinos de la Laguna (UPCALA) junto con la Alianza Campesina del Noroeste, deciden

empezar a tomar las bodegas como medida de presión, táctica que se generaliza hasta llegar a 69 bodegas tomadas y surge el Movimiento Democrático Campesino. En esta lucha, varios elementos fueron clave y decisivos; se dio un trato especial a Chihuahua, pues en Nayarit y en Chiapas sólo se hicieron promesas e incluso se reprimió el movimiento; la coyuntura electoral permitió una lucha exitosa y al margen de los organismos oficiales como la CNC. Fue un movimiento que se encadenó al proceso electoral como forma de darle continuidad; en el liderazgo hubo tres personas clave: el padre Camilo Daniel Pérez, párroco de Anáhuac, el alcalde de oposición Cuauhtémoc Humberto Ramos Molina y el profe Becerra.

En la coyuntura electoral, el movimiento campesino se transformó en movimiento electoral y fue donde los partidos de izquierda, el PSUM y el PMT concretaron su proyecto: luchar por unas elecciones limpias.

Los demás partidos tuvieron una participación marginal: el PARM, inexistente, también postula a Baeza; el PDM prácticamente no existe en Chihuahua, al igual que el PST; el PPS, aliado activo del PRI, lo poco que hace de campaña es en contra del PAN; y el CDP-PRT hace trabajo al PRI en las colonias que controla y también se lanza contra los panistas.

V. *Las campañas*. Los recursos, la organización, el estilo político y la forma de aglutinar a sus públicos, forman las estrategias de la campaña que realizaron los partidos políticos. Con las reglas del juego modificadas, los candidatos se dedicaron de manera intensa a recorrer el estado más grande del país.

Con una geografía que abarca desierto, sierra y llanuras, Chihuahua tiene una larga red de ciudades dentro de una superficie de 247 087 km<sup>2</sup>. Políticamente, existen 67 municipios que forman un estado complejo y heterogéneo.

Con los antecedentes de 1983 y de 1985, el caso Chihuahua era un desafío para los partidos políticos de oposición y tal vez una de las elecciones más complicadas que enfrentaba el PRI en varios años. Visto el proceso a distancia se puede pensar que allí se puso a prueba el inicio de un nuevo paradigma electoral, en donde el partido oficial enfrentó unas elecciones competidas y puso a funcionar toda su capacidad y recursos, que no son pocos. La campaña del PRI fue notablemente una fusión con el aparato estatal. Los recursos fueron múltiples, se puso a disposición del PRI un gran presupuesto. La campaña priísta no sólo tuvo difusión estatal, sino también nacional, en prensa y televisión.

La gestoría fue digna de jeques árabes, "yo te doy, yo te prometo, yo hago obras, yo te condono deudas, pero tú vota por mí". Viejos problemas se resolvían por un toque casi mágico de los candidatos del tricolor. En este caso no sólo era vital ganar las elecciones para recuperar los puestos de elección perdidos, sino que también era necesario arrasar a la oposición; que este proceso dejara un efecto simbólico de más largo plazo, que se sintiera el peso del poder estatal y que ante tal maquinaria electoral la oposición fuera derrotada y desmoralizada.

El lema de Baeza fue "Chihuahua vamos juntos"; se hizo una imagen del candidato que no fuera a semejanza de su partido, para lo cual fueron desapareciendo poco a poco los logotipos del PRI en la propaganda; se vendía a un candidato con un partido nebuloso por detrás, y no podía faltar en el folclor priísta un corrido con el lema a voz de mariachi.

Las primeras incursiones de Baeza en actos públicos fueron un importante indicador para saber el desgaste del partido y de su convocatoria. En Ciudad Juárez, en uno de los primeros mítines, sólo se juntó a 150 personas. En ese momento, el PRI empezó a instrumentar el proyecto de "promotores del voto"; la idea fue tener a 36 mil promotores que se encargaran de reclutar a su vez a 10 o 15 personas comprometidas a votar por el PRI, con lo cual se aseguraría 360 mil votos seguros o más. Estas matemáticas de la victoria fueron el principal instrumento visible de la campaña de Baeza. El último día de la campaña, el PRI publicó un suplemento de 20 páginas en la prensa con los nombres de los promotores, sin orden alfabético; este listado tenía más un efecto simbólico que real, pues de cualquier forma no había modo de comprobar su veracidad.

La práctica del dedazo, tan arraigada en la cultura priísta, fue uno de los frentes que más se impugnó por la oposición en la campaña. Ante ello, el PRI decidió "democratizarse" y que sus miembros eligieran a sus candidatos a las alcaldías. En marzo, a mitad de la campaña de Baeza, se abrió un proceso de auscultación y en una semana el PRI ya tenía supestandamente a sus mejores hombres y mujeres. La falta de costumbre y la fuerza del poder patrimonial se opusieron a la democratización, al vapor y saltaron inmediatamente varios casos conflictivos en algunos municipios donde se retó a los caciques. Este proceso tampoco alcanzó a llegar a Ciudad Juárez; allí se impuso al empresario Jaime Bermúdez, principal promotor de la maquila en la frontera; un empresario metido en la política era parte de la modernización que quiso hacer el PRI.

La campaña priísta trataba de cubrir todos los frentes débiles y de seguir una línea modernizadora. Reclutaba empresarios; pagaba boletines de prensa que aparecían como gacetas y movilizaba sus recursos. El eje de la campaña era el discurso conciliador y "autocrítico" de Baeza. El día que se tomó la protesta a los candidatos del tricolor en el gimnasio universitario Manuel Bernardo Aguirre, un contingente de trabajadores de la empresa Aceros de Chihuahua, con varios meses en huelga, irrumpió en el recinto y al grito de ¡aceros solución!, dio al traste con el acto priísta, que se desdibujó, y la mayor parte de los asistentes acabaron por abandonar el recinto, ante el asombro de Lugo Verduzco, entonces líder nacional del partido.

Entre este tipo de estira y afloja se llevó a cabo una de las campañas más millonarias que se recuerden en Chihuahua, el PRI cubrió casi todos los espacios políticos, llenó de propaganda las calles, pintó las bardas, estuvo diariamente en la prensa, saturó la radio minuto a minuto.

El decálogo de la oposición panista se centró nuevamente en la denun-

cia y la impugnación contra el PRI. Si la democracia hace referencia a dos valores fundamentales, la igualdad y la libertad, ha sido tradición que la izquierda tome el primero y la derecha el segundo; en esta ocasión la regla también funcionó. Al grito de ¡ya es tiempo!, el PAN tejió su doble estrategia de campaña: por una parte, hicieron una difusión de las tesis y proyectos que sustentaban, y por la otra instrumentaron una denuncia contra el fraude que llamaron “desobediencia civil”, con una serie de medidas para antes, durante y después de las elecciones.

Esta doble estrategia creó también un doble clima anímico que fue inducido por el discurso de los líderes: asegurar la victoria electoral y preparar al electorado para defender su voto. Había una contradicción en la propaganda panista, pues mientras se pedía el voto, se afirmaba también que el PRI iba a hacer fraude.

Un volante panista decía: “El 6 de julio, tienes 10 segundos de libertad para votar de acuerdo a tus convicciones.” Se privilegió el valor de la libertad, que resultó ser atractivo para una ciudadanía participante. La desobediencia civil, afirmaban los panistas, es “un acto de protesta pacífica, que se ejecuta en forma consciente y pública frente a la opresión o para combatir alguna situación injusta”. La convocatoria era para marcar los billetes con la leyenda: “en Chihuahua exigimos respeto al voto”; tapar las placas del automóvil con una calcomanía que decía: “yo soy un desobediente civil”; no pagar el servicio de agua ni el de luz.

El PAN desplegó sus recursos, que eran muy inferiores a los del PRI, en una campaña que hizo en la calle y en la prensa, porque tanto la radio como la televisión permanecieron cerradas bajo la amenaza de quitar concesiones a los dueños; en esta ocasión los panistas no llegaron al eficaz medio radiofónico.

Si el PRI tuvo una cobertura del 100% en los puestos disputados, los panistas se acercaron bastante, y por primera vez entraron a varias zonas rurales, para cubrir 60 de los 67 municipios.

El proyecto panista, aunque contaba con la orquestación afectiva, no fue ni con mucho una alternativa al del PRI, y sí fue una coladera de todos los reclamos al gobierno, al sistema y al régimen.

La campaña panista fue sobre todo de impacto simbólico, y si en política “decir es hacer”, Barrio se convirtió en un líder básicamente afectivo que comandó su campaña sobre los valores de la libertad y la valentía.

Aunque había pruebas de que a Chihuahua no la iban a soltar, y la evidencia de la millonaria campaña priísta lo confirmaba diariamente, se empezó a manejar la estrategia ideológica de que “siempre hay una primera vez” y de que ésta era la oportunidad en Chihuahua. Esta idea se difundió ampliamente durante las campañas.

Los panistas no tienen estructura corporativa para aglutinar, pero como un fenómeno nuevo, las asociaciones cívicas, las instancias de una parte importante de la organización de la campaña panista, aunque explícitamente se declaraban no partidarias su ideología, estaban inscritas del lado

blanquiazul. A diferencia de la de 1983, la campaña panista tuvo esta vez una importante infraestructura de organización que, incluso a pesar de lo improvisado que se detectaba en la coordinadora de campaña, a veces se llegó a hacer con cierto profesionalismo.

Comparativamente, el PRI tenía todo lo que al PAN le faltaba en recursos, pero el PAN, inversamente, tenía lo que el PRI no pudo conseguir: apoyarse en la gran convergencia de variados grupos de la sociedad civil que querían democracia electoral. Este déficit simbólico del PRI pesó mucho durante la contienda; el PAN, como lo señaló un observador ha ganado a pesar de que no tiene cuadros, pero ha sabido aprovechar este *superávit* afectivo.

VI. *Los obispos del norte.* Si en el terreno político, el PRI tiene todos los recursos legales e ilegales, legítimos e ilegítimos para ganarle a la oposición las elecciones, hay un coto cerrado en donde la autoridad moral es prácticamente intocable; éste es el de la Iglesia católica y sus obispos del norte.

La Iglesia del norte, como la llaman, ha tenido desde 1983 un papel relevante en los procesos electorales a través de los documentos que ha emitido: "Votar con responsabilidad" en 1983 y "Coherencia cristiana en la política" en 1986. Aunque hay una diferencia de estrategia en la emisión de los documentos (el primero lo emitió solo el arzobispo Almeida de Chihuahua, y el segundo lo suscriben los obispos del norte en conjunto: Chihuahua, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Torreón y la Tarahumara), el contenido explícito es similar, aunque la forma ideológica sea diferente; mientras que el primero es un catecismo de preguntas y respuestas para orientar el voto cristiano, el segundo es una denuncia contra el fraude electoral y contra el modelo corporativo del priísmo.

En una parte central del segundo documento dicen los obispos: "En la base, pues, de la corrupción que afecta al país, está una corrupción mayor, que es el fraude electoral" (19 de marzo de 1986). Los obispos del norte hacen un documento en el que abogan por un pluralismo político y por un proceso democrático limpio.

La politización en Chihuahua ha llevado a los católicos a una práctica política más intensa. La religiosidad nortea, que tiene la característica de ser sobria e incluso fría, es el producto de una historia donde no hubo mestizaje; últimamente ha sido terreno fértil para la emergencia de prácticas religiosas carismáticas para grupos conservadores y de las Comunidades de base para sectores populares. En este contexto, se puede decir que los obispos del norte tienen una fuerte incidencia en la vida política del estado, ya que el avance de sus posiciones ha sido notorio.

Por ejemplo, hace 30 años, el entonces obispo Guízar y Valencia mandó el siguiente mensaje poselectoral a la prensa: "El juicio sobre la legalidad y limpieza de las elecciones en el estado de Chihuahua corresponde a los HH. cuerpos colegiados y juntas de altas personalidades de los partidos políticos que tomaron parte en la contienda, y el juicio y veredicto

definitivo sobre todo lo actuado (acá abajo) toca plenamente a la opinión pública, y de ella pasará a la historia de Chihuahua.”<sup>23</sup> Ahora los obispos declaran una huelga de cultos por el fraude y ahí radica toda la diferencia.

Un sacerdote comentó la disyuntiva ideológica que resulta al ser cada vez más irreconciliable para muchos chihuahuenses ser católico y priísta al mismo tiempo; no de gratis, el PRI imprimió ahora una calcomanía que decía: “En este hogar somos orgullosamente católicos y priístas.”

Los obispos del norte han ido tomando un papel protagónico en los conflictos sociales; ya pasó el tiempo en que el obispo estaba encerrado en la iglesia y sólo se le veía cuando había ceremonias religiosas importantes. Ciertamente, el énfasis en la participación se ha dado en los procesos electorales, pero ha habido participación en el movimiento democrático mediante el padre Camilo, que es abiertamente apoyado por el obispo.

Las prácticas de los católicos han tenido políticamente dos vías de participación: los carismáticos y las comunidades de base, y en ambos ha habido un alejamiento progresivo del PRI. Las Comunidades de base que son un movimiento nacional, tienen presencia con sectores populares, en colonias periféricas y con grupos campesinos; esta parte tiene una inclinación política hacia la izquierda que hasta la fecha los partidos de esta tendencia no han sabido capitalizar, pues todavía son muy fuertes los prejuicios; la otra parte ha proliferado en grupos carismáticos que tienen una inclinación hacia el PAN y que éste ha sabido aprovechar.

Estas diversas religiosidades han tenido un eje trasclasista y se han expresado políticamente en la gran convergencia por una democracia electoral en esta coyuntura.

En una entrevista con uno de los obispos del norte le mencionamos: “dicen que ustedes son panistas”; y su respuesta fue rápida: “ahora resulta que los obispos del norte somos panistas, donde el panismo es el que tiene en jaque en algunos lugares al PRI, pero en el sur son comunistas porque el que tiene en jaque allá al PRI no es el PAN, sino el PUSUM [...] evidentemente no queremos pugnar por un partido político, sabemos que son una parte muy transitoria [...] si alguna lección sacó la Iglesia católica del siglo pasado fue que no tenía que ligarse con ningún partido político y además, si de veras anduviéramos buscando un partido político que nos sirva de apoyo, nos iríamos con el PRI, pues después de cincuenta y tantos años de estar probando que tiene la sartén por el mango, ¿quién va a andar buscando otro partido?”

Después de que en 1983 el PRI probó el costo negativo de tener un enfrentamiento abierto con la Iglesia, ahora guardó silencio ante el documento y evitó la propaganda negra contra los obispos. La táctica fue contraria y de acercamiento; el delegado al CEN del PRI, Manuel Gurría Ordóñez, fue a visitar al arzobispo de Chihuahua el 15 de mayo y cuenta don Adalberto que: “Me invitó para que me hiciera del PRI. Usted tiene que

<sup>23</sup> *El Heraldo de Chihuahua*, 4 de julio de 1956, primera plana.

ser del PRI. Ayúdenos a Baeza y a mí. Y yo le dije: mire licenciado, no es ésa nuestra posición, no hacemos política de partido. Pues hágala, me dijo.”<sup>24</sup>

En Chihuahua se ha gestado una Iglesia militante, además de doctrinaria, a favor de la participación de la Iglesia y la jerarquía en política, que pugna abiertamente contra el fraude electoral y hace una identificación entre el modelo corporativo del priísmo y la corrupción. Tal vez sea uno de los actores que, aunque actúa en coyunturas específicas, tenga la presencia menos coyuntural del resto en el escenario chihuahuense, como ya lo hemos empezado a constatar.

VII. *La socialización ideológica y los medios masivos.* La discusión de las elecciones de Chihuahua fue el fraude. Con los antecedentes de otros casos recientes como San Luis Potosí, Sonora y Nuevo León, la socialización ideológica de la campaña giró en torno a los estereotipos que a favor y en contra construyeron los partidos políticos sobre las posibilidades y limitaciones de tener unas elecciones limpias.

Si lo que menos se socializa y discute son los programas de campaña, en su lugar la discusión cotidiana fue llenada por los esquemas ideológicos interiorizados previamente y por la afectividad, que sirvieron de matriz para la orquestación ideológica de los discursos de la campaña.

Las elecciones de Chihuahua fueron un intenso campo para la polémica ideológica. Dentro de toda la maraña podemos distinguir varios planos de emisión de discursos que se entrecruzaron: el discurso callejero que circula cotidianamente; el discurso de la prensa con sus variados géneros; el discurso de los mítines de campaña; el discurso gremial de los actores, partidos, Iglesia católica, empresarios, asociaciones cívicas; todos ellos fueron formas de expresión que modularon y modelaron la coyuntura electoral y que formaron el gran discurso político del caso Chihuahua.

Dentro del discurso callejero existen varios rasgos que lo caracterizaron durante el proceso de la campaña:

– Un clima de animadversión contra el PRI, en los taxistas, los empleados de gobierno, hasta los boleros de la plaza; este clima obedeció muy probablemente a razones heterogéneas, pero que finalmente se unificaron en unos cuantos valores que se identificaban como el antipriísmo, la libertad, el respeto al voto, la dignidad y la valentía.

– El acompañante de este clima fueron las formas de aglutinar a los ciudadanos para los actos públicos; como una percepción callejera se observaba que mientras el PAN aglutinaba, el PRI recurría al acarreo. Aunque es de sentido común esta distinción, ahora estaba cargada de afectividad en simpatías y antipatías políticas.

– El contenido del discurso callejero fue la polémica sobre el fraude electoral por las denuncias anticipadas del PAN, la formación del Movimiento Democrático Electoral, el documento de los obispos y el manejo del PRI en la CEE, y los errores del padrón. En este sentido, las elecciones de

<sup>24</sup> *Proceso*, núm. 509, 4 de agosto de 1986, p. 13.

Chihuahua tuvieron un estigma permanente durante todo el proceso: ¿de qué va a servir el voto si no se va a respetar?

Las campañas políticas no existen si no están en los medios masivos de información. En esta ocasión, la prensa fue el vector principal del proceso y el pulso de las elecciones. La radio y la TV perdieron credibilidad por la presencia exclusiva y excluyente del PRI.

En la prensa local de Chihuahua ya existía una relación, casi simbiótica, entre los periodistas y los lectores; independientemente de que había diarios con más credibilidad que otros, la gente buscaba lo que quería leer y lo demás lo rechazaba. El eje de la polémica ideológica en la prensa fue la polarización entre el PRI y el PAN que llenó las páginas editoriales, los desplegados de propaganda y la información de los diarios.

Si alguien llegaba de fuera y quería enterarse de la situación política, ciertamente no lo podía hacer a través de la prensa local, pues prácticamente no había análisis. Las páginas editoriales eran el producto de la polarización y era poco creíble la crítica sin caer en el bipartidismo ideológico que se vivió en Chihuahua durante esos meses.

El bipartidismo que se dio se puede traducir en términos ideológicos como una especie de maniqueísmo; éste tuvo dos alimentadores importantes: por un lado, la construcción del PAN de un discurso simplista sobre la situación del país, las causas de la crisis, la corrupción y la opción que necesitaba México para superar estos problemas. El tono panista, aunque eficaz para la polémica callejera del momento, dejaba mucho qué desear y no era un discurso que llevara a sus públicos adherentes a una visión más compleja y atinada del país, del estado de Chihuahua y de las relaciones con Estados Unidos, pues todo su discurso giró en torno de unas cuantas banderas contra la corrupción.

El otro alimentador fue el discurso priísta, que a pesar de sus intentos de renovación neopriísta, siguió usando el lenguaje de la revolución mexicana, que para unos resultaba ridículo, para otros era ofensivo y para una gran mayoría era poco creíble e incluso indiferente. Había por ejemplo casos particularmente disonantes, como el del candidato a la alcaldía de Chihuahua que gritaba en los mítines que iban a sacar a la clase empresarial del municipio, y junto a él tenía a su compañero de fórmula que era el ex gerente de la Canacinfra.

El encierro dogmático se reflejaba a diario en la prensa local; para unos, los otros eran "corruptos insalvables", y para los contrarios eran "vendepatrias, hijos de Maximiliano". En Chihuahua las tendencias de los periódicos eran más o menos las siguientes: *El Herald de Chihuahua*, de la Organización Editorial Mexicana, que le daba espacio al maniqueísmo y publicaba prácticamente todo de ambos partidos; *El Novedades de Chihuahua*, perteneciente al grupo Vallina, tuvo una inclinación más priísta, y en la etapa poselectoral fue boicoteada por los panistas; de cualquier forma, perdió credibilidad; el *Norte*, adquirido recientemente con capital de Ciudad Juárez, mantuvo una tendencia más priísta; y el *Diario de Chi-*

*huahua*, filial del de Ciudad Juárez, el más joven de los cuatro, mantuvo una postura independiente; como un rasgo notable, este diario no aceptaba gacetillas priístas para que aparecieran como información; le dio cobertura a todo el proceso y, por supuesto, estuvo estigmatizado de panista; pero habría que mencionar que fue el periódico que más credibilidad logró en el proceso electoral, e incluso aumentó significativamente su tiraje.

En Ciudad Juárez, la situación era similar; el *Diario de Juárez*, que es el de mayor circulación, tiene una fuerte incidencia y está formado por un grupo independiente de periodistas de tendencia plural, y financieramente cuenta con capital local. *El Fronterizo* es filial de *El Herald* y el tercero es *El Universal*; estos dos últimos tienen una circulación relativamente baja respecto al *Diario*, y por lo tanto menor credibilidad en el caso de la frontera.

Los grandes medios nacionales entraron también al encierro dogmático, sobre todo el *Excelsior*, Televisa e Imevisión, que se convirtieron en agencias priístas. La excepción fue la revista *Proceso* que mantuvo una postura independiente y gracias a la modulación permanente que le dio al caso logró tener una gran credibilidad, aumentar su circulación, e incluso después de las elecciones se convirtió simbólicamente en uno de los espacios de difusión del movimiento de convergencia antifraude, junto con el *Diario de Chihuahua*.

El otro gran espacio de socialización ideológica se abrió, sin duda, en los momentos plásticos de la campaña: los mítines. Las concentraciones públicas eran el resultado y la expresión de los dos modos de hacer política, y las prácticas en donde la afectividad inundaba las plazas y se hacía presente la masa. En estos momentos plásticos, se daba la dimensión del público de cada partido, la forma de aglutinarla, las interpelaciones para animarlo y las respuestas inducidas o espontáneas de la masa hacia el líder y el orador.

El PRI mostró un público de pertenencia, que mediante el acarreo y las listas de asistencia llenaba la plaza. El PAN se caracterizó por tener un público de adherentes que también llenaba la plaza. Los actos de la izquierda distaban bastante de ser de masas. El acto priísta era breve; las consignas se gritaban por oficio y tenían un animador, conjuntos musicales y simulaban un ambiente festivo; los discursos de los candidatos eran los de la revolución mexicana y la modulación era la de la gesta heroica; había una diferencia significativa y visible en el público: adelante, cerca del templete, los líderes de todas las categorías respondían con interés al orador; el resto era sólo relleno de masas, ajenas y distantes que circulaban como acarreados, campesinos, obreros, colonos que cumplían con el requisito de la asistencia.

El acto panista era prolongado, llegaba al ritual, y el público adherente iba a escuchar, a gritar, a protestar y a sentirse masa. No había relleno y de la heterogeneidad de los asistentes salía una homogeneidad que cerraba el aplauso y el grito. Mientras los priístas gritaban una consigna "¡vamos

a ganar!", en los actos del PAN se empezó a corear una consigna que empezó de forma espontánea con el claxon de los automóviles (ta-ta-ta, ta ta-ta), que significaba "¡Barrio sí, Baeza no!"

Para los priístas, ir al mitin era una obligación de lista o un compromiso de los líderes; para los panistas era un ritual de protesta y esa diferencia estaba presente como radioactividad que diferenciaba los mítines del corporativismo y los de la convergencia.

#### PARCIALIDAD, MANIPULACIÓN O FRAUDE

I. Para cualquier democracia resulta desgastante invertir una buena parte de sus recursos y capacidades en defender, vigilar y protestar por irregularidades en el proceso electoral. Lo cual quiere decir que en México una buena parte de los alegatos sobre la democracia electoral gira todavía sobre la legitimidad de las elecciones y su transparencia. En el caso Chihuahua, una parte importante de las estrategias de campaña se centraron en discutir y polemizar sobre la posibilidad o imposibilidad de unas elecciones limpias.

Una diferencia de la democracia mexicana con otras, no es que aquéllas no tengan corrupción en su sistema político, o un manejo autoritario y a veces represivo del poder, sino que existe una dosis menor de impunidad de los actores gubernamentales y de sus funciones públicas. La fuerte impunidad de la democracia mexicana ha contribuido a generalizar prácticas, que en otras democracias podrían derrumbar a un gobierno sin que pase nada; prácticas como la de la parcialidad en un dictamen electoral, la manipulación del padrón o algún tipo de fraude.

Estas prácticas han sido, probablemente, las que más han contribuido a convertir a las elecciones mexicanas en rituales preestablecidos sin competitividad.

II. En Chihuahua sucedieron irregularidades y anomalías durante el día de las elecciones, donde hubo casos de relleno de urnas y expulsión de representantes de casilla de los partidos de oposición. Irregularidades antes de las elecciones con el manejo del padrón electoral que sufrió una fuerte manipulación; y problemas de parcialidad en el dictamen del Colegio Electoral. Para demostrar este conjunto de anomalías nos basamos en el estudio de Juan Molinar, "Regreso a Chihuahua" (*Nexos*, núm. 111, marzo de 1987), en los testimonios que recogimos y en la observación que realizamos durante ese 6 de julio de 1986.

En este sentido, el caso Chihuahua tuvo un largo período en donde la atención pública y la lucha poselectoral se centró en la discusión sobre las preguntas siguientes: ¿hubo fraude electoral?, ¿de qué tamaño fue el fraude?, ¿las irregularidades registradas cambian los resultados?, ¿es factible saber con exactitud quién ganó y qué ganó?

De todas estas preguntas sólo es posible documentar algunas, es decir,

sí hubo irregularidades, aunque éstas no llevaron a anular la elección como lo pedían los panistas, ya que el dictamen oficial sólo anuló unas cuantas casillas de las cerca de 500 que según los panistas tuvieron problemas. Según el estudio de Molinar, hubo dos problemas serios, uno fue la manipulación del padrón, y el otro fue la parcialidad en el dictamen del Colegio Electoral. Pero veamos por partes el proceso.

El 17 de junio, tres semanas antes de las elecciones, un grupo de 200 señoras panistas tomó las oficinas del Registro Nacional de Electores de Chihuahua para exigir la entrega del padrón y tener tiempo de corregir las posibles fallas y omisiones en el listado de los representantes de casilla. Con esta acción empezó de hecho la recta final del proceso electoral. Después de tres días, en medio de un clima tenso, se logró la entrega del padrón, y tal como se había presupuesto, existían errores, personas que habían sido omitidas, otras con domicilio diferente y algunas con nombres cambiados.

Aunque los panistas se dedicaron durante la campaña a revisar el padrón en las principales ciudades del estado, la tarea fue insuficiente para tener un padrón confiable, lo cual implica, de hecho, tener un censo confiable, y es imposible para cualquier partido político.

En el estudio de Molinar se muestra cómo se manejó el padrón de Chihuahua para estas elecciones. Se hicieron dos cosas básicamente: el sobreempadronamiento en los municipios rurales en donde se incluían más nombres que el total de los habitantes de un municipio o distrito, por ejemplo, en Manuel Benavides, donde hay 2 627 personas en el padrón, cuando sólo existen 1 224 ciudadanos (132.9% de exceso); y el caso de Coronado que tiene 2 112 nombres a pesar de que en el municipio viven sólo 1 030 ciudadanos (114% de exceso). Otros municipios sobreempadronados presentan excesos superiores al 40%.<sup>25</sup>

El otro rasgo del caso se basó en la inflación que sufrió el padrón de Chihuahua en términos generales. Resulta que es el de mayor crecimiento del país en los últimos tres años; de esta forma el padrón del estado de Chihuahua, cuyo crecimiento demográfico fue de 0.92%, creció en un 7.30%.<sup>26</sup>

Ambos rasgos del padrón en Chihuahua presentan datos suficientes para suponer que no se trata de errores técnicos, pues además del crecimiento existe una lógica que determina en qué partes debe crecer, casi como una variable dependiente de las zonas en donde existe menor vigilancia, donde la oposición es más débil y en los municipios más pobres y rurales del estado. Según estimaciones aproximadas, se puede presumir un sobreempadronamiento mayor a los 93 mil ciudadanos fantasmas, en un padrón global que creció a un ritmo casi 8 veces superior al de su crecimiento demográfico.

III. Otro factor fue el debilitamiento de la oposición en los represen-

<sup>25</sup> Juan Molinar Horcasitas, "Regreso a Chihuahua", *Nexos*, núm. 11, marzo de 1987, p. 27.

<sup>29</sup> Molinar, *op. cit.*, p. 25.

tantes de casilla. Este rasgo se hizo para remachar la reforma a la ley que exigía residencia de 6 meses en la sección para poder ser representante de casilla.

Días antes de la elección, la CEE, por la mecánica de trece votos contra cuatro, desconoció a la mayoría de los representantes del PSUM en Chihuahua, Juárez y Camargo principalmente. Esta situación posibilitó que la oposición estuviera marginalmente representada en las casillas, además de que la misma vigilancia del proceso electoral se debilitara.

De esta forma se dejó prácticamente solo al PAN en las casillas como oposición. El desconocimiento de los representantes del PSUM se calculó con base en los problemas que ocasionó en 1985, cuando por la firma de las actas de escrutinio del PAN y PSUM se obstaculizó el fraude en aquellas elecciones.

IV. Un factor previo a las elecciones fue el volante falso que se distribuyó anónimamente en Chihuahua y Ciudad Juárez en la madrugada del 6 de julio. El volante tenía las características tipográficas de la propaganda panista y ordenaba que la última medida de "desobediencia civil" era no ir a votar.

El reparto clandestino se hizo en los principales centros de reunión de estas dos ciudades, iglesias, plazas, cines y calles más transitadas. De las intenciones que tenía esta acción de propaganda negra se pueden destacar que, primero sería desconcertante que a última hora se ordenara no votar, y segundo, que el PAN se hiciera acreedor de la sanción que indicaba la reformada ley de desconocer a la planilla. La maniobra fue tan evidente que ni el PRI ni los partidos paraestatales pidieron el retiro del registro a la planilla panista, y simplemente quedó el hecho como un eslabón más de la cadena, tal y como se había anunciado cuando se reformó la ley electoral.

V. El día de las elecciones, 6 de julio, se destaparon las cartas restantes de la operación, y cronológicamente se empezó con las casillas "madrugadoras" que fueron abiertas antes de la hora reglamentaria.

En esta situación se encuentra un número considerable de casillas, y a modo de ejemplo se pueden tener algunos datos del siguiente tipo: "en las 23 casillas de la ciudad de Chihuahua que el PAN impugnó por haber sido instaladas antes de tiempo, se computó la siguiente votación: PAN, 11 829 votos contra 19 511 del PRI. Esas mismas casillas habían recibido la siguiente votación apenas un año antes: PAN, 10 443 votos contra 8 047 del PRI. Es decir, en las casillas "madrugadoras el PRI tuvo un aumento de 11 464 votos respecto del año anterior (140% de mejoría) mientras el PAN solamente avanzó 1 386 votos (13% de mejoría)".<sup>27</sup>

Después vino la expulsión de representantes de casilla del PAN y la novedad de falsificarlos con nombramientos espurios. Una a una se pueden enumerar las irregularidades que se llevaron a cabo ese largo día 6 de

<sup>27</sup> Juan Molinar H., *op. cit.*, p. 25.

julio, según datos que presentó Acción Nacional como pruebas del fraude en la solicitud de nulidad ante las autoridades locales y federales:

- relleno de urnas — 207 casillas
- expulsión de representantes — 49 casillas
- falsificación de representantes — 28 casillas
- cambios de ubicación de casillas
- urnas ocultas — 113 casillas
- votación bajo presión — 70 casillas
- supresión de casillas en zonas densamente pobladas
- tortuguismo para votar (10 y 12 horas)
- apertura de casillas auxiliares en zonas populares.

Estas irregularidades se distribuyeron de la siguiente forma en cada distrito:

| <i>Distrito</i>      | <i>Núm. de impugnaciones</i> | <i>% sobre el total</i> | <i>Núm. de casillas</i> | <i>% sobre el total-1789</i> |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| I Chihuahua          | 120                          | 13.04                   | 95                      | 5.31                         |
| II Parral            | 223                          | 24.23                   | 62                      | 3.45                         |
| III Cuauhtémoc       | 150                          | 16.30                   | 61                      | 3.41                         |
| IV Juárez            | 94                           | 10.21                   | 68                      | 3.80                         |
| V Camargo            | 147                          | 15.97                   | 80                      | 4.47                         |
| VI Juárez            | 24                           | 2.60                    | 16                      | 0.89                         |
| VII Guerrero         | 4                            | 0.43                    | 4                       | 0.22                         |
| VIII Ojinaga         | 51                           | 5.54                    | 34                      | 1.90                         |
| IX Casas Grandes     | 55                           | 5.97                    | 32                      | 1.79                         |
| X Guachochi          | —                            | —                       | —                       | —                            |
| XI Guadalupe y Calvo | —                            | —                       | —                       | —                            |
| XII Uruachic         | —                            | —                       | —                       | —                            |
| XIII Sta. Bárbara    | —                            | —                       | —                       | —                            |
| XIV Juárez           | 52                           | 5.65                    | 48                      | 2.68                         |
| Total                | 920                          | 100.00                  | 500                     | 27.95                        |

FUENTE: *Chihuahua Proceso Electoral 1986*, p. 249.

Ese día de las elecciones estuvo plagado de irregularidades, fraudes, acciones de autoritarismo de los funcionarios electorales, violencia de la fuerza pública hacia la población que reclamaba algún tipo de fraude. Además, la documentación que se presentó para certificar el fraude electoral

es posible entenderla como el intento por documentar lo indocumentable, que para el aparato estatal fue completamente insuficiente, como lo atestigua el libro del equipo que preparó el caso Chihuahua.

Observadores y periodistas recorrimos el mayor número de casillas para tener datos, testimonios y constatar in vivo el proceso; y fue como descubrir un hilo negro que nos llevó a ver urnas rellenas, largas colas donde la gente esperaba su turno para votar, la expulsión de representantes de casilla por cualquier motivo... un día largo que transcurrió tal y como se esperaba.

A las 7 de la tarde, el PRI citó a una conferencia de prensa y el delegado Gurría del CEN declaró la victoria del partido oficial, también como se esperaba. En la sala de prensa había unos 300 periodistas locales, nacionales y extranjeros que observábamos al priísta hacer piruetas para justificar el poco creíble triunfo; al final, un periodista hizo una pregunta obligada: "¿Cuántas actas tiene para respaldar su triunfo?" La respuesta sonó burda: "28 actas", de un total de 1 789. Por último, se escuchó otra pregunta: "¿Se atrevería usted a calificar estas elecciones de transparentes?" El delegado meditó unos segundos y dijo: "Bueno, las podría calificar de legítimas." Estas declaraciones fueron hechas a periodistas y observadores que fuimos testigos de las urnas "madrugadoras", el tortuguismo, casos de ciudadanos que habían sido borrados del padrón, casos de enojo y decepción cuando se descubría una urna repleta después de 20 o 30 votos, funcionarios que violaban la ley y recibían el repudio de la gente. Tres horas después llegó Baeza a otra conferencia de prensa y en otro tono, sin triunfalismo, declaró que todavía no tenían datos para hablar de victoria.

VI. De todas las impugnaciones que presentaron los panistas, un total de 920, que afectaban a 500 casillas, el Colegio Electoral procedió a anular sólo 8. Según el dictamen que calificó el proceso electoral, la mayoría de las impugnaciones se calificaron de la siguiente forma: "no ocurrieron"; "no son causantes de anulación"; "no se aportan pruebas suficientes"; "no son irregularidades generalizadas"; y "aunque se cometieron, no alteran los resultados sustancialmente".<sup>28</sup>

En el análisis, Molinar hace una contraargumentación a cada uno de los temas y finalmente recapitula del siguiente modo: "el análisis de la forma en que se revisó la evidencia presentada por el PAN en el Colegio Electoral de Chihuahua es insuficiente para probar fuera de toda duda la existencia de un fraude descomunal, pero basta para mostrar que: 1, las autoridades pertinentes juzgaron con parcialidad; 2, el número de casillas anuladas debió ser mucho mayor si las autoridades hubieran juzgado el caso con apego a letra y espíritu del texto legal; 3, aún más casillas hubieran tenido que anularse si la ley misma no diera pie a que muchas prácticas políticas que la oposición juzga inconvenientes se consideren lícitas".<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Chihuahua, *proceso electoral 1986*.

<sup>29</sup> Molinar, *op. cit.*, p. 25.

Con este tipo de evidencias y de estudios la pregunta de si hubo fraude se puede contestar en dos sentidos: si se considera que hubo irregularidades en varias casillas, que se manipuló el padrón y que el dictamen del Colegio Electoral fue parcial; si se considera lo anterior más las evidencias, pruebas y testimonios presentados que no fueron considerados oficialmente como pruebas de fraude, éste sí existió. En ambas respuestas el problema es considerar si las irregularidades, la parcialidad y la manipulación del padrón son fraude o son simplemente anomalías del proceso que todavía no es posible suprimir porque la democracia electoral es defectuosa y ni modo, así suceden las cosas. Otra variante sería considerar que este tipo de irregularidades llevan una intención política de alterar los resultados y afectar a una de las partes contendientes.

Con base en lo anterior podemos considerar que sí hubo fraude, pues las irregularidades mencionadas constituyen una evidencia. Lo que no es factible considerar es si el tamaño de las irregularidades alteraba sustancialmente los resultados finales para cambiar al ganador.

En otro sentido, también se puede considerar que el 6 de julio algo cambió en Chihuahua, es decir, se revaloró el voto para los ciudadanos que lo emitieron, con lo cual se generó una amplia respuesta de la sociedad civil que se movilizó en contra del fraude y que originó una convergencia social mayor a la que existía antes de las elecciones. La siguiente parte es una crónica de lo que pasó después del 6 de julio de 1986.

#### LA GRAN CONVERGENCIA POSELECTORAL

I. *La convergencia.* La diferencia entre lo que ocurrió con el caso Chihuahua después de las elecciones del 6 de julio, y el proceso previo, fue la conjunción de una voluntad generalizada de la sociedad civil en contra del fraude electoral; esta gran convergencia poselectoral desbordó los pronósticos que se podían tener y expresó cómo pueden convergir en un movimiento social grupos y actores de tendencias antagónicas, cuando se enfrentan contra un aparato estatal que quiere conservar el poder a cualquier costo y como producto de una "obsesión por la unanimidad".<sup>30</sup>

Esta voluntad estatal por la unanimidad expresa, en primer lugar, una inadecuación respecto a una sociedad civil que se encuentra en proceso de modernización y que exige pluralismo; en segundo lugar, significa que modernizarse en Chihuahua en estos momentos consiste en la formación de una amplia voluntad de diversos sectores sociales por una democracia electoral; en tercer lugar, el movimiento que se gesta después de las elecciones tiene la orquestación de los cambios previos que se habían dado desde 1983, principalmente en situaciones electorales; y en último lugar, la forma del príismo que optó por el fraude electoral fue una afrenta

<sup>30</sup> Como lo señala el despliegado de los intelectuales, que apareció el día 25 de julio en los medios masivos de información.

generalizada a los diversos sectores de la sociedad civil que aspiraba a un respeto del sufragio.

Es necesario distinguir los momentos que tuvo la gran convergencia poselectoral, sus principales acontecimientos, los actores protagonistas que encabezaron la lucha antifraude, sus intereses y posiciones y la dinámica social que se dio en Chihuahua desde el 6 de julio hasta la toma de posesión del 3 de octubre de 1986.

Ejemplarmente, la dinámica política del proceso de modernización que ha experimentado Chihuahua en los últimos años, tuvo uno de sus momentos más importantes en el movimiento antifraude de 1986, y fue como una síntesis en donde se entrecruzaron diversas posturas antagónicas, para formar una coincidencia de coyuntura. Si la discusión central de las elecciones fue el fraude electoral, las evidencias que lo comprobaron fueron el detonante que presagió ese “verano caliente”, como lo denominó el escritor Fuentes Mares unos meses antes de morir.

Dentro de los postulados de interpretación de la gran convergencia se pueden destacar los siguientes:

- la racionalidad oficial-priísta que llegó a consumir el fraude y a defenderlo hasta sus últimas consecuencias, mostró a un PRI que no pudo modernizarse al ritmo y al tiempo en que la sociedad chihuahuense lo hizo en los últimos años;

- el movimiento de convergencia antifraude se construyó ideológicamente sobre la crisis de la moral política que ha protagonizado el partido oficial como el antagonista de los valores socializados de: sufragio efectivo, respeto al voto y recuperación de la dignidad perdida;

- las elecciones chihuahuenses del 6 de julio evidenciaron los límites de la democracia electoral mexicana y la incapacidad estatal para modernizarse ante una sociedad que demanda los mínimos rasgos de unas elecciones democráticas;

- la convergencia social se aglutinó sobre una regla mínima de la democracia: defender el voto independientemente de quién fuera el beneficiario, lo cual posibilitó que se desdibujaran las fronteras de lo meramente partidario, para gestarse una pugna entre el aparato estatal y sus diversas conexiones institucionales que se enfrentó a la convergencia de una sociedad civil que pedía la anulación de las elecciones: partidos de oposición, grupos empresariales, la Iglesia católica y su jerarquía, huelguistas de hambre, asociaciones cívicas, ciudadanos, campesinos, etcétera.

El conflicto que se gestó por el fraude electoral estuvo protagonizado por dos bloques heterogéneos de actores sociales que se enfrentaron en una lucha con posturas irreductibles; el aparato estatal trató de legitimar, defender y llevar hasta sus últimas consecuencias la operación de “carro completo”, la obsesión por la unanimidad de poder, frente a una sociedad civil que pugnó por la anulación del proceso.

II. *La ambientación del verano caliente.* Del tamaño del conflicto fue la vigilancia del proceso electoral; 25 mil soldados llegaron al estado de

Chihuahua días antes del 6 de julio para instalarse en las oficinas de gobierno, en las comisiones electorales, para hacer recorridos por las calles y “vigilar” las casillas. También fueron acuartelados todos los cuerpos de policía, según datos publicados en la prensa local.

Si los constructores de la realidad social son los medios de información, en los días que siguieron al 6 de julio, la socialización más amplia de lo que sucedió el día de las elecciones se dio mediante las versiones, experiencias y el nutrido anecdotario de los ciudadanos participantes que fueron a votar. Experiencias que eran narradas de acuerdo con la afectividad que inundaba el ambiente. La prensa empezó a reproducir los desplegados y las versiones con más intensidad que antes del 6 de julio.

El día 7 de julio, el PAN llamó a una conferencia de prensa y anunció que los votos del PRI “estaban afectados de nulidad”, por lo cual las cifras carecían de sentido y en consecuencia se pediría la anulación de las elecciones. Ese mismo día, los gremios empresariales de la localidad anunciaron que iban a convocar a sus miembros a una asamblea para tomar medidas ante las “irregularidades” del proceso electoral. Y para terminar el día, los líderes del Movimiento Democrático Electoral (MDE) denunciaron el fraude y publicitaron la formación de un jurado popular para calificar el proceso.

El 8 de julio, el PAN anuncia las primeras medidas y sorprendentemente sus militantes se lanzan a la calle y durante una hora bloquean los principales cruceros de la ciudad de Chihuahua. Al día siguiente, el arzobispo Almeida declara que hubo fraude y que en consecuencia se deben rechazar los cargos, justifica las medidas de desobediencia civil y apoya abiertamente al MDE, en donde participa el sacerdote Camilo Pérez. Ese 9 de julio, el MDE convoca a un mitin y se da a conocer la estrategia de lucha y los nombres de los integrantes del jurado popular.

El 10 de julio, los empresarios hacen el primer paro de 12 horas y efectúan un plantón frente al palacio de gobierno en signo de protesta contra el fraude.

En las siguientes horas, el Movimiento Familiar Cristiano organiza una misa en la Catedral para rezar por la salud de los tres hombres que estaban en huelga de hambre desde principio del mes. Ese 10 de julio los militantes panistas salen de la Catedral después de haber celebrado el rito santo y se integran al mitin al que había convocado el PAN, y mientras la plaza se llenaba de ciudadanos, un helicóptero empieza a sobrevolar en círculos a la multitud; la tarde presagiaba lluvia y el mitin se inicia. Barrio grita las primeras medidas de lucha: “somos muchos más que ellos y les vamos a hacer sentir nuestro poder; empezaremos con un boicot al periódico *Novedades* y a las radiodifusoras del grupo Radiorama [...] de hoy en adelante que nadie compre el *Novedades*, que nadie escuche las estaciones del grupo Radiorama y lo más importante, que nadie compre en los establecimientos que se anuncien en esos medios [...] y vamos a ver si este pueblo que está aquí reunido tiene poder”. Ese día eran entre 25 mil y 30

mil personas y al día siguiente en Ciudad Juárez se repitió el acto panista, pero allá en la frontera el contingente era el doble.

Dos días después, el PRI realizó un mitin de victoria con la consigna de: "¡porque trabajamos para ganar, ganamos!" En esta ocasión la pieza central la hizo Baeza, que se dedicó a hacer un recuento de su campaña, explicar los pasos de calificación del proceso electoral y defendió el triunfo priísta; impugnó a la oposición y finalmente hizo un llamado para conciliar a los chihuahuenses. Fue un mitin en donde se tuvo que traer gente de las poblaciones cercanas, ejidos y rancherías, para poder llenar la plaza. La racionalidad de Baeza fue defender las instancias legales y afirmar que no querían votos falsos, pero que tampoco iban a entregar los votos priístas, que eran la mayoría.

El verano chihuahuense empezó a sobrecalentarse; el jueves 10 de julio, Pancho Barrio le puso cuenta regresiva al proceso antifraude, señaló que además de las medidas anunciadas iban a realizar un plebiscito y dijo enfático: "si el próximo domingo en las juntas computadoras les entregan constancias de mayoría a los usurpadores, exactamente en una semana contada a partir de hoy bloquearemos las carreteras del estado".

Puntualmente, a los ocho días los panistas bloquearon las carreteras y tomaron los puentes internacionales de la frontera; los empresarios convocaron a otro paro que no tuvo el mismo éxito del primero; el jurado popular empezó a recibir las pruebas de las irregularidades; los obispos del norte preparaban acciones más radicales, y el claxon de los automovilistas tocaba todo el día (ta-ta-ta, ta ra ta,ta), ¡Barrio sí, Baeza no!

Los partidos de izquierda locales, PSUM y PMT, se incorporaron de lleno al MDE, y el PRT nacional decidió condenar el fraude y separarse, en los hechos, del CDF.

Así empezó a gestarse la convergencia antifraude de esas primeras semanas del "verano caliente".

III. *Democracia o muerte.* A partir del 1 de julio, el alcalde de Chihuahua, Luis H. Álvarez, y en Ciudad Juárez el doctor Víctor Manuel Oropeza, junto con el empresario Francisco Villarreal, decidieron iniciar una huelga de hambre para exigir respeto al proceso electoral y "garantía de libertad a los ciudadanos para emitir su voto".

Los ayunantes expresaron real y simbólicamente el dilema entre democracia o muerte. Desde sus respectivos campamentos, fueron un foco de atención permanente durante los 41 días que duró la huelga de hambre. Como una de las nuevas tácticas de lucha que empezó a usar el panismo en Chihuahua, la huelga de alimentos de estos tres personajes tuvo una difusión pocas veces vista; la prensa construía diariamente el acontecimiento y las modulaciones se daban como noticia de primera plana; cuántos kilos perdían, cuántas horas cumplían, cuál era su estado de salud, eran preguntas cotidianas.

Después de las elecciones, los campamentos "por la verdad en Chihuahua" de los huelguistas fueron el punto de reunión de panistas y no panis-

tas que circulaban todos los días; visitantes locales y de otras partes del país llegaban a platicar con los ayunantes. Al pasar de los días, esta huelga de hambre se trasmutó en el símbolo de distinción de la lucha por la democracia para el movimiento de convergencia social antifraude. Los desplegados de prensa fueron multiplicándose; grupos de simpatizantes pedían que se levantara la huelga. El símbolo de “dar la vida” por la democracia tuvo un impacto afectivo que poco a poco empezó a preocupar al aparato estatal.

El 28 de julio, la revista *Proceso* dio a conocer un desplegado de los tres ayunantes en donde afirmaban: “Los que permanecemos en el ayuno desde el 1 de julio, queremos dejar la más clara constancia de que si las autoridades insisten en burlar la voluntad popular, mantendremos el ayuno hasta el fin.

“Chihuahuenses:

”Es necesario definirse, proclamar que queremos vivir en paz y en libertad, mas si el gobierno se empeña en impedirnoslo, nosotros preferimos morir defendiendo la verdad.”<sup>31</sup>

Los cuerpos agotados y débiles de los tres ayunantes cumplieron casi hasta el final. Después de haber permanecido todo julio y los primeros 10 días de agosto, decidieron de forma conjunta levantar la huelga y el aparato estatal y probablemente Baeza también descansaron. ¿Cómo iba a responder el presidente De la Madrid en Washington, aquel 15 de agosto, a los reporteros del National Press Club, si los tres hombres hubieran seguido el ayuno?

La especulación del problema dio lugar a preguntas que quedaron sin respuesta: ¿cómo iba a asumir el régimen las tres muertes de una huelga ampliamente difundida?, ¿podría gobernar Baeza bajo la sombra de la muerte de don Luis, el doctor Oropeza y el señor Villarreal? Lo que estaba relativamente claro era que si la huelga hubiera tenido un desenlace fatal, el movimiento de convergencia hubiera pasado a otro nivel y quién sabe las consecuencias que se hubieran desatado. Hasta ese momento, las acciones del movimiento, que ya habían superado al PAN y demás organizaciones involucradas, llegaron con el final de la huelga a la frontera de la violencia y el domingo 10 de julio, después de 41 días de ayuno, empezó otra etapa.

Días antes del levantamiento de la huelga llegó a Chihuahua el dirigente del PMT, Heberto Castillo, para dialogar con los tres hombres que ayunaban y pedirles que levantaran su campamento y que iniciaran una lucha conjunta para “caminar, no morir”. Les dijo: “si han decidido dar la vida por esta causa, yo los invito a que la entreguen en abonos, no al contado [...] Preparémonos para enfrentar juntos al sistema en las elecciones federales de 1988 [...] nunca lo hemos hecho juntos. Hagámoslo, vayamos todos, van PAN, PMT, PSUM, PRT, PDM: la oposición real de izquierda y de derecha, pero con una posición bien clara frente al gobierno:

<sup>31</sup> *Proceso*, núm. 508, 28 de julio de 1986.

o respeta la voluntad del pueblo o nos vamos a la violencia. Por mi parte estoy dispuesto a morir".<sup>32</sup>

Cierto o no, en la comprensión de una parte importante de la opinión pública quedó la impresión de que Heberto había convencido a don Luis para levantar la huelga. Claro que en la decisión pudieron intervenir factores diversos, desde el instinto de conservación de la vida, las peticiones de miles de ciudadanos anónimos, intelectuales, familiares, la obsesión gubernamental de legitimar los triunfos priístas, hasta la convicción de que sería mejor seguir vivo en una lucha más a largo plazo. También es real que Heberto supo aprovechar el momento: para unos fue oportunista y para otros oportuno. Supo capitalizar el movimiento chihuahuense para darle una convergencia nacional con los demás partidos de oposición y veladamente candidatearse para ser el hombre de la oposición en 1988.

La interpretación sobre si don Luis debería o no haber levantado la huelga es ambigua: cumplir con la palabra hasta el final (si no, ¿para qué se anunció así?); o bien como él mismo lo declaró ante una multitud de simpatizantes el día que se terminó: "Para mí la decisión más fácil, en cierto modo, sería la de permanecer en este quiosco con el propósito inicial; sin embargo, el ayuno y los argumentos de todos los que me han escrito y visitado ha enriquecido y ampliado mis perspectivas [...] hoy abandono el ayuno para, al lado de ustedes, salir a ocupar las nuevas trincheras."<sup>33</sup>

Aunque la famosa convergencia de los partidos de izquierda con los de derecha fue rápidamente neutralizada por la desaprobación que hizo Heberto públicamente, cuando los panistas fueron a Washington a ver al senador Helms y a apelar ante la OEA, de todas formas quedó de manifiesto que la intervención del ingeniero Castillo en Chihuahua fue meramente coyuntural.

Esos 41 días de democracia o muerte para algunos no se fueron completamente en blanco, pues como dijo Pablo Latapí: "La heterogeneidad de posiciones ideológicas de los ayunantes ha manifestado el carácter cívico, no partidista, del movimiento de oposición chihuahuense y el repudio generalizado a la mentira en que descansa el mecanismo electoral del régimen. El propósito irrevocable de la decisión ha sacudido conciencias, alentado a opositores de izquierda, centro y derecha y a un cuestionamiento a algunos cómplices. La fisura es evidente e irreversible [...] El mensaje está dado y de sobra entendido. La autoinmolación no es necesaria."<sup>34</sup> Para otros ciudadanos, la huelga debería haber llegado hasta el final o no prometerse lo que no se iba a cumplir.

IV. *Los partidos políticos.* El caso Chihuahua presentó una nutrida lucha poselectoral en donde los partidos de oposición fueron superados por el movimiento de convergencia, que cuando se llegaron a tener todos

<sup>32</sup> En *Proceso*, núm. 510, 11 de agosto de 1986.

<sup>33</sup> *Proceso*, núm. 511, 18 de agosto de 1986.

<sup>34</sup> Periódico del PSUM *Así se*, núm. 174, 23 de julio de 1986.

los ingredientes para hacer un conflicto en serio y poner en jaque al aparato estatal se replegaron, y el partido oficial tuvo que tener el respaldo del Estado para medio salir de apuros, un periodista, que no era simpatizante del PAN, dijo que con más elecciones como ésta se acabaría el PRI.

El partido oficial, después de haber proclamado el triunfo el día de las elecciones, empezó a publicar los resultados electorales en desplegados que titulaba: "Así vamos ganando"; expuso en la plaza las actas de escrutinio que fueron quemadas unas horas después durante el mitin del MDE y finalmente se hizo un mitin de la victoria para dar a conocer las razones del triunfo. Después de esa primera semana se replegó, y el candidato Baeza desapareció de la escena pública durante los siguientes 15 días y empezaron a circular rumores sobre la desaparición. El candidato oficial tuvo que hacer un discurso impenetrable a las críticas y a las impugnaciones del fraude; el día que pudimos entrevistarle, después del 6 de julio, nos dijo que las fallas del proceso electoral eran: "porque es una obra humana, yo creo que hasta en Suiza, que es una democracia muy avanzada debe haber fallas" y su opinión sobre el movimiento antifraude fue: "son las manifestaciones de los perdedores, que se olvidan que los procesos electorales tienen un foro distinto al de la calle, que los foros electorales, sobre todo en cierta etapa, se definen en las urnas por un lado y también se califican por los organismos correspondientes".

La estrategia priista fue la de esperar que pasara la tormenta y que el Colegio Electoral declarara el triunfo legítimo. Los pasos de la maquinaria se dieron uno a uno, y el domingo siguiente de las elecciones se entregaron las constancias respectivas a los candidatos del partido oficial. Las otras conexiones institucionales del aparato estatal también hicieron su trabajo poselectoral. El despliegue de recursos y capacidades tuvo como directriz mantener hasta sus últimas consecuencias la política del "carro completo". Mientras el caso Chihuahua crecía como bola de nieve, los alquimistas del aparato estatal hacían sus cálculos de táctica para impedir que el movimiento rebasara la frontera de la violencia y no tener que pasar de la alquimia a la represión, como se había hecho en San Luis Potosí y en Monterrey.

Los panistas tuvieron que aceptar al partido ante la imposibilidad de frenar el fraude, pues aunque se prepararon más que en las dos elecciones anteriores, no fue suficiente, en el supuesto de que sea factible enfrentar una operación multifraude. De igual forma que el PRI se dedicó a defender el triunfo, el partido blanquiazul puso en marcha la estrategia de impugnación. No hubo sorpresas para nadie; la partitura estaba escrita y la etapa poselectoral se tenía dibujada. Los panistas locales tuvieron que plantarse ante la dirección nacional que no estaba muy de acuerdo con las medidas de presión; como es su tradición, el PAN de México quiso llevar el caso Chihuahua por la ruta conocida, derrotas electorales, triunfos morales y la vía de los procedimientos establecidos, pero se impuso el neopanismo y la nueva vocación de poder.

El PAN rápidamente descalificó los comicios y le quitó el valor a las cifras. Prácticamente desde el segundo día, los líderes panistas anunciaron la anulación de las elecciones como directriz. Casi todo el operativo estaba previsto, pues si algo tuvieron estas elecciones fue la anticipación como estrategia para priístas y panistas. El PRI dijo "vamos a ganar" y "ganamos", y el PAN señaló que iba haber fraude y lo hubo; por lo tanto, los dos tenían que ser congruentes con su estrategia previa.

A diferencia de 1983 y 1985, ahora los panistas no declararon su triunfo, sino la impugnación del proceso y la necesidad de repetirlo. El discurso que emitían líderes y candidatos panistas conectaba las irregularidades de la etapa de preparación con las del 6 de julio, y aunque se hablaba de cientos de casos, sólo se ejemplificaba con algunos. Este manejo panista del fraude fue presentado ante su público como algo evidente, y dado que los alquimistas no dejan recibo, se hace más complicado comprobarlo según los requisitos legales establecidos, ya que no se aceptan pruebas testimoniales, que eran las que abundaban.

La estrategia panista fue aprovechar el momento de la convergencia y la cresta del movimiento para lanzarse en corto con las acciones anti-fraude; durante los meses de julio, agosto y septiembre, los del blanquiazul desplegaron todos sus recursos y capacidades hasta que fueron rebasados y se replegaron: pedir la nulidad del proceso ante los organismos correspondientes; darle resonancia al movimiento a través de los espacios no copados en los medios masivos de información; el inicio de acciones de presión, boicotear medios masivos (*Novedades*, *Radorama*) y comercios (*Futurama*), bloquear carreteras y puentes fronterizos, continuar con las medidas de desobediencia civil; celebración de audiencias de la fracción parlamentaria con el presidente de la República y con el secretario de Gobernación; la realización de un plebiscito en once ciudades en donde los ciudadanos depositaban su credencial de elector en urnas públicas, del cual resultaron un total de 185 217 votos, cifra inferior a los votos obtenidos y reconocidos oficialmente en todo el estado que fue de 231 063 en total; y finalmente, la denuncia en Washington ante el senador republicano Helms y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Ésos fueron los tópicos de la estrategia panista que fue rebasada por el movimiento de convergencia y se enfrentó a la voluntad de poder del aparato estatal. La convocatoria de Barrio en los mítines era incendiaria y las bases del PAN respondieron en el momento a las acciones de presión; los mítines contaban con 20 y 25 mil ciudadanos, las tomas de carreteras eran nutridas, los campamentos de los puentes internacionales tenían permanentemente a 4 y 5 mil personas. Los líderes panistas no quisieron prender el cerillo al final y pasar la frontera de la violencia, así que el paso del tiempo y la inercia bajaron el ánimo, y sólo el resentimiento quedó en la memoria chihuahuense, ante el peso de la maquinaria estatal que se quedó con el pastel en ese estado norteño. El peso de los hechos consumados tam-

bién tuvo un peso importante en la inercia social a la que inexorablemente conducen las coyunturas electorales.

Ante la posibilidad de radicalizar el movimiento que llegó al borde, los panistas decidieron al final de cuentas replegarse en un movimiento de resistencia cívica a largo plazo; éstos fueron los indicadores de aquel 10 de agosto, cuando los tres ayunantes se retiraron y el Congreso local convertido en Colegio Electoral dio a Baeza su certificado legal para que pudiera gobernar durante los siguientes seis años. La fuerza de los hechos consumados y el repliegue panista indicaron que todavía no es tiempo, aunque los *slogans* panistas de campaña señalaran lo contrario.

Para los partidos de izquierda, el caso Chihuahua tuvo repercusiones por demás significativas para su redefinición política ante los procesos electorales y las vías democráticas hacia el socialismo.

Las posturas previas al 6 de julio tuvieron como conclusión situaciones novedosa y reacomodos necesarios. El PSUM, que tuvo una votación muy baja, de sólo 4 583 votos, también perdió; no sólo estuvo ausente de la vigilancia de las casillas, sino que también se le hizo fraude en el municipio de Zaragoza, que había ganado en 1983, y que ahora quedó dentro del "carro completo" del priísmo, como el costo político que tuvo que pagar por haber apostado a la convergencia democrática en Chihuahua.

La contribución más relevante del PSUM al proceso electoral chihuahuense fue probablemente la definición de una voluntad política de luchar por unas elecciones efectivas, como lo señaló el profe Becerra: "Entendemos que el voto de los chihuahuenses no es de izquierda ni de derecha, es un voto moral."<sup>35</sup> Su participación en el MDE le permitió al PSUM formar parte de la convergencia social y presentarse como un partido opositor. Su línea directriz fue denunciar el fraude. Posteriormente, cuando se firmó el pacto de Ciudad Juárez en agosto, el PSUM nacional, a través de Arnoldo Martínez Verdugo, se unió con los otros líderes nacionales de izquierda y de derecha; esta postura era difícil de prever, porque la postura de Becerra encontró fuertes obstáculos en la dirección nacional del partido.

La alianza entre el CDP y el PRT entró en un conflicto irreductible, pues mientras el CDP guardó silencio ante el fraude en una postura de consecuencia, pues él participó de la maquinaria oficial expulsando a los representantes del PAN en las casillas de la colonia Pancho Villa, el comité central del PRT se deslindó de los cedepistas y pidió también la anulación de las elecciones. Unos meses después, el CDP anunció públicamente la terminación de la alianza con el PRT y dio a conocer la preparación de un nuevo partido político junto con otras organizaciones. El CDP tuvo también una votación muy baja y sólo logró obtener 13 379 votos, según las cifras oficiales.

Mientras se debatía el caso Chihuahua, la Secretaría de Gobernación convocó a una serie de audiencias para una renovación político-electoral

<sup>35</sup> Periódico del PSUM, *Así es*, núm. 174, 23 de julio de 1986.

en el Distrito Federal. Un miembro destacado del PRT rechazó la invitación y en un artículo indicó públicamente sus múltiples razones:

“No puedo estar de acuerdo con la concepción de la democracia que sugiere que los medios deben subordinarse a los fines. Los fines sólo pueden justificar a los medios cuando los fines, a su vez, se justifican, y aquí es donde interviene la ética de clase, la moral revolucionaria contra la moral conservadora. De aquí que tampoco pueda coincidir con quienes, a nombre de su supuesta representación popular, expulsaron a los representantes panistas de las casillas, pero no a los priístas, con el argumento de que la reacción no tiene consenso ni cabida en la colonia Villa de Chihuahua. Y no puedo estar de acuerdo porque, en primera y última instancia, no es el PRI mejor que el PAN o, en todo caso, el PAN no ha tenido el poder suficiente para demostrar que entregaría todavía más el país a las fuerzas imperiales de lo que lo ha hecho el PRI [...] En Chihuahua no se detuvo, con los inaceptables medios usados, a la reacción, a una de las fuerzas reaccionarias que por la crisis, entre otras razones, ha ganado mejores posiciones que las tenidas en el pasado. No. Se detuvo el anhelado avance democrático con métodos igualmente reaccionarios y antidemocráticos.”<sup>36</sup>

V. *El Movimiento Democrático Electoral*. El impulso que tuvo el exitoso movimiento campesino de las tomas de bodegas de CONASUPO y el aumento, como excepción, de los precios de garantía quiso tener su encadenamiento al proceso electoral. El MDE fue una tribuna plural no partidista, que buscó darle resonancia popular a la convergencia social chihuahuense.

Después del fraude el MDE formó un jurado popular para que dictaminara las elecciones sobre la base de las pruebas que ciudadanos, partidos y asociaciones ofrecieran como testimonio.

De hecho, el MDE fue el primer ensayo regional de lo que posteriormente sería el pacto nacional por el sufragio efectivo. Aunque el encadenamiento no fue tan exitoso como la lucha campesina, porque no es lo mismo luchar por el precio de garantía como una demanda vital, que por un proceso electoral, y esta distancia se reflejó en la base campesina; de todas formas el MDE fue un eslabón importante.

A pesar del poco éxito en términos de movilización, el MDE tuvo una presencia necesaria en el noroeste del estado y en algunas otras ciudades, y encabezó algunas movilizaciones significativas, como la del 9 de julio en la ciudad capital. Ahora que la coyuntura electoral ha pasado, el MDE sigue con un amplio campo de intervención en las zonas campesinas del noroeste, en la sierra Tarahumara y probablemente sea en un futuro próximo una experiencia activable de nueva cuenta, siempre y cuando esté ligado a las necesidades sentidas del sector campesino, sobre el que tiene amplia capacidad de convocatoria.

En la coyuntura electoral, el MDE fue una parte considerable de la con-

<sup>36</sup> Octavio Rodríguez Araujo, “Por qué no participo en gobernación”, *La Jornada*, 29 de julio de 1986.

vergencia antifraude y de hecho su convocatoria era el surtidero plural de los partidos y las asociaciones cívicas.

El jurado popular, integrado por ocho personas que no eran militantes de ningún partido político y que además tenían una reconocida probidad moral ante la ciudadanía chihuahuense, se dedicó durante un mes a recopilar pruebas en forma exhaustiva y logró hacer uno de los balances más serios del proceso electoral. De todo el estudio, destacamos los siguientes datos, que dan una idea del número de irregularidades:

1) De 1 775 casillas instaladas en el estado, el jurado tuvo acceso a datos correspondientes a 1 384, con cifras de padrón y votos.

2) De este número, se tuvo la documentación completa de 358.

3) De esas 358 casillas, 303 arrojan diferencia entre el número de boletas con las que se inició la casilla y con las que concluyó la votación.

4) Existen 223 casillas que arrojan diferencias entre los datos de la votación y el número de votantes.

5) Hay 477 casillas que arrojan diferencias entre los datos proporcionados por el Partido Revolucionario Institucional y los encontrados en las actas de escrutinio.

6) Existen 111 casillas, con más de 1 500 electores registrados en el padrón, número máximo que se estima razonable para que pueda sufragar durante el tiempo que dura la jornada.

7) Hay 16 casillas en las que los votos superan el 110 por ciento del padrón, máximo autorizado por la ley.

8) Se recogieron 372 denuncias que afectan a 257 casillas, muchas de ellas de fuentes diversas y sobre los mismos hechos.

9) En Ciudad Juárez se observa que los datos están asentados en forma de actas complementarias de escrutinio en 219 casos. Estas actas deben ser utilizadas solamente en el caso de anotar las boletas que se encuentran en urnas equivocadas.<sup>37</sup>

En este mismo dictamen, como conclusión, el jurado, después de que “repudia” al PRI, al PAN y la intervención estadounidense, “censura” la intervención eclesiástica y “reprueba” el sectarismo de la izquierda, exige la anulación de las elecciones.

VI. *La jerarquía católica.* Después de 1983, la Iglesia católica en Chihuahua inició en forma abierta y pública su lucha por tener presencia y autoridad moral en los procesos políticos.

Las iniciativas de los obispos del norte marcaron una etapa distinta de la participación política de la jerarquía, con un discurso directo que se manejó con las contradicciones de una emisión coyuntural e histórica, pero con una argumentación ideológica ahistórica. El discurso y la presencia de los obispos norteros fue, hasta antes del 6 de julio, la emisión de una teología de los derechos humanos, centrada fundamentalmente en los procesos electorales, con lo que se pudo asegurar una eficacia simbólica

<sup>37</sup> “Dictamen del jurado popular al pueblo de Chihuahua”, en *Diario de Chihuahua*, 8 de agosto de 1986, p. 12.

sobre los católicos practicantes que formaron parte de la convergencia social antifraude.

Después de las elecciones, los obispos del norte denunciaron el fraude y pasaron a las acciones; el 12 de julio, en la homilía que se leyó en todos los templos de la ciudad de Chihuahua, se afirmó la denuncia al fraude y las acciones que en consecuencia tomaría la jerarquía:

“El domingo pasado, seis de julio, hubo alguien que cayó en manos de unos salteadores; alguien que sufrió toda suerte de vejaciones, maltratos, burlas y desprecios. Alguien a quien se atacó en lo más delicado de su dignidad, a quien se amenazó, se mintió, se faltó al respeto en sus derechos humanos. Ese alguien fue el pueblo de Chihuahua [...]

“Por eso, conforme al Evangelio que también es denuncia, *denunciamos* enérgicamente los hechos vergonzosos de la jornada electoral del domingo 6 de julio. *Denunciamos* la mentira, el fraude, el tortuguismo, la prepotencia de la fuerza pública, la suplantación de personas, el chantaje, las amenazas, y toda suerte de arbitrariedades que se dieron ese día [...]

“Que el hecho de que este domingo 20 permanezcan los templos sin el culto acostumbrado, como lo hemos determinado y lo estamos anunciando, como señal de protesta, sea un fuerte grito de nuestra parte para quienes todavía hoy permanecen con los ojos vendados o están ciegos por su propia culpa.”<sup>38</sup>

Después de la homilía del arzobispo, empezó a moverse la maquinaria estatal y la eclesiástica para ver de qué forma se podía neutralizar la radical acción anunciada.

En el centro del conflicto de los obispos del norte y su relación con el proceso electoral está la cuestión de fondo que modela el conflicto: la compleja relación entre la Iglesia y el Estado mexicano, tanto en su dimensión histórica, como en las soluciones recientes que ha tenido la conflictiva relación.

Como en otros aspectos, en México existe una distancia entre la letra y las prácticas; en este caso, la Carta constitucional en su artículo 130 no reconoce “personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias” y los “ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en los actos de culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país [...]. No tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos” (artículo 130). La respuesta de los obispos a la prohibición constitucional es la distinción entre la política partidista y la política en sentido amplio que busca el bien común y que se funda en el Evangelio.

Como parte de las prácticas toleradas, existe una relación especial, que no es completamente oficial pero que opera y funciona; entre la jerarquía católica y el aparato estatal mexicano. Esta tolerancia se mantiene

<sup>38</sup> Homilía del arzobispo de Chihuahua, Adalberto Almeida, que fue leída el sábado 12 y el domingo 13 de julio de 1986 en las 62 parroquias de la ciudad.

dentro de una dinámica conflictiva, que se expresa cada vez que la frontera institucional es rebasada por la práctica religiosa, o cuando se trata de alguna "innovación" eclesial. En el caso Chihuahua, los obispos, sus documentos y acciones antifraude, entraron en la zona prohibida al condenar prácticas corruptas, como el fraude electoral, y culpar directamente al gobierno. Por parte del aparato estatal, las prácticas religiosas y las acciones de la jerarquía son solapadas cuando éstas benefician la política oficial o no la perjudican directamente. La historia no es nueva; las leyes de Reforma separaron a la Iglesia del Estado mexicano cuando la jerarquía era parte central de la estrategia de dominación de las clases dominantes del siglo XIX. Institucionalmente, la Iglesia mexicana y su jerarquía ha seguido en esa dinámica, salvo contadas excepciones, en donde la Iglesia ha dado giros importantes para practicar una política de denuncia contra la opresión y la explotación.

Las características de heterogeneidad del campo religioso, en donde la Iglesia católica tiene el monopolio legítimo del poder religioso, sitúan a los principales actores de este campo en posiciones diversas y a veces irreconciliables. Cuando la Iglesia, y en particular algunos de sus sectores, empezaron, a finales de los años sesenta, a cambiar de orientación y dieron cobertura real a la veta "liberadora" del cristianismo, entonces pudieron emerger grupos vinculados en orientación y prácticas hacia las clases subalternas. Esta orientación innovadora fue conflictiva para el aparato estatal.

En Chihuahua, como en otras partes del país, existen grupos de la Iglesia opuestos ideológicamente entre sí, que pueden cubrir casi todo el diagramado político, desde la izquierda hasta la derecha, sin presentarse grupos ultras en ninguna de las posturas pues, aunque pueden existir, no tienen una manifestación pública, como sí sucede en zonas como Guadalajara, Puebla o León. En este caso, la modulación principal de la participación eclesial en el terreno de la política ha estado orientada hacia los procesos electorales y contra la corrupción oficial. La visión de los obispos del norte coincide, en muchos aspectos, con las lanzas ideológicas del panismo. Tal vez lo nuevo del caso sea el énfasis de las declaraciones de la jerarquía y la dimensión que alcanzó la radical medida de suspender los cultos como protesta por el fraude. Esta huelga de misas que recordó el conflicto cristero de 1926, puso al descubierto el manejo entre la alta jerarquía y el núcleo gobernante del Estado mexicano. El secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, pidió al delegado apostólico, Girolamo Prigione, su intervención para echar atrás la huelga de misas decretada por el arzobispo Almeida. El viernes 18 de julio llegó la orden de la delegación apostólica para no suspender los cultos y que hubiera misas normalmente. La orden estaba firmada desde Roma por el secretario de Estado del Vaticano, Agostino Casaroli. El argumento explícito fue la contradicción de privar a los católicos de su culto, según el derecho canónico. Finalmente hubo misas y el arzobispo Almeida se disciplinó. Arreglos privados, separaciones públicas.

Las relaciones especiales entre los jerarcas, la Delegación del Vaticano y la secretaría del control político llegaron a un concordato de coyuntura; la historia se hizo pública y el propio arzobispo Almeida declaró la versión a la revista *Proceso*, la cual tituló su portada con la siguiente leyenda: "Bartlett logró la intervención del papa en Chihuahua."<sup>39</sup>

La jerarquía católica en Chihuahua ha tenido una presencia social en varios acontecimientos, por lo menos desde los años setenta, en donde ha hecho declaraciones para apoyar algunas huelgas como la de Aceros de Chihuahua, ha apoyado la lucha campesina en donde el padre Camilo Pérez participa; el énfasis más relevante y las intervenciones radicales las ha tenido en relación con los procesos electorales. Este acento pronunciado de la jerarquía en favor de una democracia liberal y modernizante, la ubicó como el eslabón doctrinario de la convergencia social antifraude.

El documento de 1983, "Votar con responsabilidad", marcó claramente que el voto cristiano debería ser por aquellos partidos que no tuvieran como ideología el "liberalismo capitalista" o el "colectivismo marxista", y en consecuencia el voto de los católicos debería estar orientado e inspirado en la doctrina social de la Iglesia; en este contexto, fue el PAN el que más cercanía ideológica ha tenido con estos principios. El documento de "Coherencia cristiana en la política" es una denuncia contra el "modus operandi" del partido oficial; fue un discurso muy similar a la visión que ha difundido el panismo sobre el país, la crisis, la corrupción y la falta de democracia.

La causa inmediata del discurso de los obispos norteros es la denuncia contra el fraude y la corrupción oficial, pero la causa profunda de la gramática ideológica de estas prácticas discursivas es la relación conflictiva entre la Iglesia y el Estado. Para la Iglesia, la separación es aceptada; pero en México, al no tener personalidad jurídica reconocida, hay un reclamo permanente de la jerarquía. Para el Estado mexicano este desconocimiento y la misma separación es un logro histórico del movimiento de reforma del siglo XIX.

En una reunión reciente de la alta jerarquía católica con la alta burocracia política, un obispo señaló que ya era tiempo de que la Iglesia católica tuviera reconocimiento jurídico; la respuesta del funcionario fue que los casos que mencionaba el obispo para sustentar su petición, como el del cura Hidalgo y Morelos, habían comandado la independencia, pero excomulgados; entonces intervino otro de los obispos y señaló que todo era cuestión de la óptica histórica y era relativo.

El discurso de los obispos del norte se mueve ideológicamente en el paradigma institucional de los textos oficiales de la Iglesia, que forman parte de una simbología susceptible de múltiples interpretaciones. En el caso Chihuahua, la producción ideológica de los obispos convalida la versión panista sobre la corrupción oficial y se inscribe en la coyuntura electoral como la doctrina política para el católico. A diferencia de los obispos

<sup>39</sup> *Proceso*, núm. 509, 4 de agosto de 1986.

de la región Pacífico-sur, cuya producción ideológica está directamente emparentada con la teología de la liberación, con la incorporación de la perspectiva de las clases sociales, el discurso de los obispos del norte no habla de dominación o de explotación, sino de democracia, corrupción y abusos de poder. Esta diferencia marca distintas estrategias para manejar la relación entre Iglesia y Estado.

La decisión de suspender los cultos en Chihuahua, que finalmente no se llevó a cabo, tuvo un impacto simbólico importante para los católicos, y abrió la posibilidad de que el compromiso de la jerarquía norteña pudiera manifestarse no sólo contra el fraude, sino también sobre otros conflictos importantes contra los derechos humanos, en donde los beneficiarios reales de la autoridad moral de la Iglesia sean grupos de campesinos, obreros, colonos, porque ahora en Chihuahua la convergencia de la Iglesia benefició principalmente al PAN, víctima del fraude.

La forma en que fue tomada la medida de suspender cultos reflejó cierto caudillismo de la jerarquía, porque aunque se hizo en nombre de la democracia, no fue resultado de un proceso democrático propiamente dicho, sino una decisión jerárquica, al igual que la contraorden de Prigione. Tal vez los talleres sobre la democracia a los que convocó la Iglesia ahora en 1987 sean un indicador de que la Iglesia en Chihuahua ha avanzado en su estrategia y que ya no bastan los documentos, sino que la injerencia en la vida política por parte de la Iglesia se encamina a hacer trabajo de base.

VII. *Los empresarios.* Varias situaciones hacen complejo el fenómeno y la participación de los empresarios en el proceso electoral chihuahuense; hay una extraña vocación empresarial en favor de la democracia en el discurso de los gremios empresariales en Chihuahua; los empresarios no son los actores maquiavélicos que están detrás del ascenso panista en el norte, junto con el clero y el Departamento de Estado estadounidense, como dicen los del nacionalismo revolucionario; los grupos empresariales conforman un mosaico ideológico en sus opciones políticas y no son ni actúan como un bloque homogéneo; este sector social fue sólo una parte de los factores de la convergencia antifraude; y el movimiento de convergencia fue algo más que una simple pugna interburguesa de familia entre el PRI y el PAN.

La participación empresarial en el norte ha estado cruzada por el estigma PAN-burguesía o neopanismo. Esta relación tiene una polisemia ideológica que hace referencia a situaciones diferentes, desde el factor generacional, un estilo de hacer política de ciertos grupos empresariales del norte del país, hasta el aglomerado de adjetivos como "joven", "moderno", "peligroso", o la nueva derecha empresarial.

Lo cierto es que en Chihuahua hay empresarios con el PAN y con el PRI, y desde luego hay de empresarios a empresarios, desde los grandes capitales como Vallina, Bermúdez, Prieto, Fernández, Creel, Mares, etcétera, hasta una amplia gama de medianos y pequeños hombres de empresa. La participación de capitanes de industria en Acción Nacional no es no-

vedad; desde sus orígenes hay una tradición que inaugura el propio Gómez Morín; tal vez lo nuevo socialmente sea que desde los años setenta en Sonora se da la participación en bloque de grupos empresariales en procesos electorales, pero sobre todo a partir de la nacionalización de la banca en 1982, hay una constante que crece, en donde los hombres de empresa se convierten en políticos y son candidatos del PAN en Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Sonora, entre otros estados.

Los apoyos políticos de este sector son variados, desde la militancia abierta hasta el respaldo económico y secreto. Este gremio forma parte del proceso político en el caso Chihuahua de una forma contradictoria, "están con un pie en la forma oficial-priísta de dominación corporativa y con el otro en el ascenso de un partido de ciudadanos; ya no comparten la desgastada visión oficial que sostiene al PRI como heredero de la revolución y al mismo tiempo son pieza clave de las manifestaciones de modernización de una cultura y una economía de máquina".<sup>40</sup>

El sentido común de los ideólogos empresariales, que se encargan de socializar teorías vulgarizadas sobre la crisis económica al estilo Pazos, son alimentadores de un discurso empresarial que ha tenido cierta eficacia al expresar una versión del país y una conciencia antigubernista, que ignora y es parcial al desconocer los costos que ha tenido la estructura de beneficios estatales al capital y los subsidios para que el capital privado se pueda reproducir de forma privilegiada. Encadenado a esta conciencia ideológica antigubernista que se manifiesta orgánicamente desde el sexenio de Echeverría, ahora los gremios empresariales expresan su extraña vocación democrática y denuncian el fraude electoral, contrariamente a lo que hizo este sector en Juchitán, Oaxaca, donde avaló el fraude priísta.

El día 10 de julio, las cámaras empresariales, Canacindra, Canaco y el Centro Empresarial, se lanzan al primer paro de comercios e industrias en la ciudad de Chihuahua, y logran un éxito relativo, pues más de 1 000 empresas se unen al paro patronal de 12 horas. En un ambiente de polémica interna, los gremios siguen posteriormente con otras medidas de presión, hacen un segundo paro que ya no resulta, algunas empresas declaran el IVA en ceros, se intenta un retiro masivo de fondos bancarios que tampoco tuvo mucho respaldo, se publican varios desplegados de denuncia contra el fraude y se logra que otros 49 gremios de varios estados del país se solidaricen con los de Chihuahua. Finalmente, se crea una organización empresarial nueva para continuar la lucha que pronto se destiñe; quedó el resentimiento, pero el negocio es más importante, y esta nueva organización, REDH, Rescate Empresarial por los Derechos Humanos, se pierde como una sigla más en el horizonte chihuahuense.

A pesar de la movilización de los gremios, los grandes empresarios son punto y aparte y políticamente están con sus grandes intereses, es decir, con el sistema, y Chihuahua no es la excepción. Durante el proceso elec-

<sup>40</sup> Alberto Aziz, "Neopanismo y neopriísmo en Chihuahua", CIESAS, 1986, en prensa.

toral se dan diversas posturas políticas entre los grupos empresariales: los "concertadores", que necesitan protección estatal, tienen poca competitividad, forman en general la pequeña y la mediana empresa y no son un grupo de presión contra el PRI; los que quieren "apretar para negociar" mejores posiciones, critican al sistema político mexicano, pero al fin de cuentas están por la concertación y los beneficios estatales; los "desencantados a la ofensiva" que colindan y participan en el neopanismo, quieren participación política en puestos de elección popular y no dependen tanto de la política económica gubernamental, sino de los ciclos económicos estadounidenses, son competitivos y calculan su producción en la perspectiva de exportar; por último están los empresarios trasnacionales que manejan y controlan la industria de la maquila, y asumen dos actitudes: los que viven en Chihuahua y simpatizan con el panismo y los que viven del otro lado de la frontera y no quieren arriesgar su capital en caso de un conflicto y prefieren el funcionamiento político sin cambios.<sup>41</sup> Este último sector fue el más afectado cuando los panistas bloquearon los puentes en la frontera.

Los empresarios más conservadores y algunos de sus voceros, distinguen una diferencia en el proyecto económico del PRI y el del PAN; para ellos el panismo significa mayor apertura y liberalización de la economía, en cambio el priísmo sigue con las tesis del intervencionismo estatal en la economía. Esta mentalidad empresarial difícilmente encontrará la diferencia a nivel regional, pues tanto con un partido, como con el otro, el proyecto de desarrollo económico de Chihuahua es bastante similar en la práctica.

El PRI históricamente ha ido recomponiendo su proyecto y sus compromisos, hasta llegar a la situación actual en donde se han desgastado sus lazos con sus sectores incorporados para ser casi exclusivamente masas de maniobra; esta situación trae consigo un agotamiento del discurso de la revolución que está cada vez más distante de las prácticas políticas gubernamentales. El PAN defiende una democracia empresarial y neopanista, no tiene compromisos históricos con sectores sociales que hayan cristalizado en pactos, tal vez por no haber estado nunca en el poder realmente, por lo que se alinea por una democracia liberal, opuesta a las formas tradicionales en las que se fraguó el Estado mexicano, y que ahora impugnan los sectores convergentes en Chihuahua.

Como el proyecto económico para la región no marca diferencias sustanciales en los programas políticos, a la dinámica que se ha seguido en los últimos años en Chihuahua, y en general en la franja fronteriza del país, la protesta empresarial se destiñó rápidamente.

Con Baeza en la gubernatura, el capital tiene asegurados sus intereses y su reproducción, a pesar de que el neopanismo empresarial signifique en Chihuahua la forma política de embonar lo que históricamente fue

<sup>41</sup> Tomamos las tres primeras designaciones de los grupos empresariales de la ponencia de Edmundo Jacobo, "Empresarios y Estado, la crisis de un pacto", presentada en el seminario Empresas y empresarios en México, organizado por COMECO, en mayo de 1986 en Jalapa, Ver.

diferido por la vigencia y legitimidad del PRI como partido hegemónico. Ahora hubo un acercamiento notorio del PRI a los grupos empresariales y el gabinete que formó Baeza fue una resultante de ello, y mostró la capacidad de maniobra entre el PRI y su sector "inominado", los empresarios.

La extraña vocación democrática del empresariado chihuahuense habría que ubicarla dentro de la convergencia social antifraude, y sobre todo por la incidencia de los empresarios "desencantados y a la ofensiva, comulgantes del neopanismo y que quieren una democracia electoral, siempre y cuando los cambios no lleguen a una democracia social que pudiera afectar sus intereses, como la democracia sindical.

Una pregunta pendiente queda en el diagramado político: ¿de qué forma la modernización económica y la integración acelerada de la vía maquilera serán vectores hacia un pluralismo electoral, o hacia una modernización de la estructura tradicional y el "modus operandi" del PRI? Esta pregunta obedece a las posibles consecuencias que puede generar políticamente que el centro de dominación se encuentre cada vez con más fuerza del otro lado de la frontera.

VIII. *Los intelectuales.* Parte de los ecos nacionales que tuvo el movimiento de convergencia en Chihuahua, fue la presencia de intelectuales que públicamente pidieron la anulación de las elecciones.

Esta presencia fue otro punto de preocupación para el aparato estatal, pues el grupo que firmó el desplegado tiene prestigio social y representa éste no tuvo el prejuicio de manifestarse aun cuando se tratara de un fraude contra el PAN, porque probablemente fue más importante el movimiento tendencias independientes; al contrario de ciertos sectores de izquierda, de convergencia que las diferencias ideológicas o partidarias.

El desplegado de los intelectuales señaló: "Hoy más que nunca los electores necesitan creer que votar tiene sentido: más sentido que la abstención o la violencia. Para eso hace falta que los vencidos queden convencidos. Los testimonios ciudadanos y de la prensa nacional e internacional registran suficientes irregularidades como para arrojar una duda razonable sobre la legalidad de todo el proceso. Para despejar plenamente esta duda, que toca una fibra central de la credibilidad política en México, pensamos que las autoridades procediendo de buena fe, deben restablecer la concordia y anular los comicios en Chihuahua."<sup>42</sup>

Unos días después, el grupo firmante fue citado por el secretario de Gobernación Bartlett para "aclarar" el caso; algunos fueron, otros no y unos más fueron, pero ante la impuntualidad del secretario se retiraron. Posteriormente, el propio Baeza envió una carta a cada uno de los firmantes; era necesario no dejar espacio o crítica sin respuesta. Las cartas de Baeza fueron cuidadosamente elaboradas y con una redacción personalizada: a cada uno un comentario de su obra y halagos varios. Algunos

<sup>42</sup> Desplegado que apareció en *El Heraldo de Chihuahua* el 26 de julio de 1986, y también salió publicado en *Proceso* y *La Jornada*, firmado por 20 personas, entre ellas, Aguilar Camín, Benítez, Paz, Krauze, Monsiváis y Zaid.

contestaron a Baeza y la revista *Proceso* transcribió la respuesta de Gabriel Zaid, en donde el autor de *El progreso improductivo* dice: "Le agradezco mucho su carta y su cortesía. De su serenidad y del anexo deduzco que usted supone que ganó las elecciones. Francamente me alegra. Sería horrible y autodestructivo gobernar bajo el supuesto contrario [...] No es imposible que usted haya ganado, aunque me sorprendería mucho [...] Hay quienes dicen que usted ganó a pesar del fraude. Tampoco es imposible, pero me parece improbable."<sup>43</sup>

IX. *El Colegio Electoral: caso juzgado.* Tal como lo afirmó Zaid en su respuesta a Baeza, la autoridad del Colegio Electoral pone en duda la legitimidad que pueda tener, pues al final de cuentas ¿quién cuenta los votos?, y ¿quién vigila al vigilante?

La estrategia priísta de defensa del triunfo fue ceñirse al dictamen del Colegio, que por supuesto es mayoritariamente priísta en su integración. Por eso, aunque el poder produzca saber, como dice Foucault, en este caso la verdad oficial fue poco creíble. "La sociedad, aunque tenga pruebas abrumadoras contra la verdad oficial, no puede demostrar nada oficialmente, sin el consentimiento oficial. Ésta es la situación del que acusa a un juez de corrupto, y no tiene más juez que el acusado."<sup>44</sup>

El Colegio Electoral rechazó las pruebas testimoniales, que abundaban, y cumplió cabalmente con lo que fue meramente un trámite: el 9 de agosto declaró a Baeza gobernador electo y además, por medio de un dictamen unánime, en donde el diputado panista Rubén Salgado extrañamente firmó también. Inmediatamente fue sancionado por el PAN y suspendido de sus derechos políticos; razonablemente no era lógico que el panista firmara cuando su partido pedía la anulación e incluso se había retirado del Colegio, así que Salgado, o fue comprado o fue chantajeado.

Como dijo en una ocasión un ilustre diputado, los alquimistas no dejan recibo y en este caso también fue así. Resulta en muchos casos muy complicada o imposible la comprobación del fraude en términos de la verdad oficial. Si se revisa el dictamen del Colegio Electoral, la mayoría de las pruebas e impugnaciones son desechadas por falta de valor jurídico. De los 920 casos de irregularidades que presentó el PAN, el Colegio sólo procedió a anular 32 casillas; el resto no tuvo valor de comprobación. Según el dictamen del jurado popular, que sólo tuvo datos completos de 358 casillas, había 303 con diferencias de boletas, 223 con diferencias de votantes, etcétera. Para los funcionarios electorales es difícil aceptar una prueba de fraude; por ejemplo, el 6 de julio en una casilla de la colonia popular Pavis Borunda se descubrió una urna rellena, se levantó un acta notarial y cuando llegaron los funcionarios de la Comisión Estatal Electoral no aceptaron cerrar la casilla, ¿quién vigila al vigilante?

Para que supuestamente no quedaran dudas, el aparato estatal difundió un libro, *Chihuahua proceso electoral 1986*, en donde se responde a las

<sup>43</sup> *Proceso*, núm. 517, 29 de septiembre de 1986.

<sup>44</sup> Gabriel Zaid, en *Proceso*, op. cit.

irregularidades, y se justifica plenamente la legitimidad del proceso y el triunfo del PRI; lo importante fue que nada quedara sin respuesta oficial.

Con el dictamen del Colegio se llegó a la última fase de las elecciones chihuahuenses, se reafirmó el "carro completo": para el PRI fue la gubernatura, 65 de los 67 municipios y las 14 diputaciones; las otras dos fueron una para el PPS, Gómez Farías, y Nuevo Casas Grandes para el PAN; en ningún caso se anuló el proceso.

Los resultados oficiales para la gubernatura fueron:

| <i>Partido</i> | <i>Votos</i> | <i>Padrón</i>                       |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| PRI            | 395 221      | 1 291 924                           |
| PAN            | 227 858      |                                     |
| PRT-CDP        | 13 379       |                                     |
| PSUM           | 4 583        |                                     |
| PPS            | 2 567        |                                     |
| PST            | 1 900        |                                     |
| PARM           | 1 886        |                                     |
| PDM            | 578          |                                     |
| Total          | 647 972      | representa el 50.15%<br>del padrón. |

- Los votos del PARM son para el candidato del PRI.
- El PDM no presentó candidato, al igual que el PMT.
- La abstención fue de 49.85%.

El Colegio electoral puso punto final a la estrategia que combinó la obediencia regulada a las directivas del poder del Estado y la organización jurídica y administrativa para la defensa de los puestos de elección popular. Sólo quedó pendiente el tercer factor que empezaría a partir de la toma de posesión en octubre: la dependencia del circuito impuesto/gasto para mantener al gobierno estatal desde el centro del país mediante el apoyo presupuestario.

Para la racionalidad oficial, el fraude en Chihuahua fue una ilusión colectiva que se vivió durante los meses del "verano caliente".

X. *El efímero pacto plural*. Aunque fuera meramente coyuntural, el caso Chihuahua y las elecciones de Durango y Oaxaca, pusieron sobre

la mesa de discusión el tema de la democracia y las necesidades de unirse para izquierdas y derechas y asociaciones cívicas, para luchar por el sufragio efectivo, vieja consigna maderista.

A raíz del movimiento chihuahuense de convergencia y con los tres huelguistas como símbolo, se reunieron en Ciudad Juárez el 8 de agosto el PAN, el PSUM, el PRT, el PMT y las asociaciones cívicas, para suscribir lo que se conoció como el pacto de Juárez por el sufragio efectivo.

La cresta del movimiento de convergencia tuvo lugar en los primeros días de ese agosto de 1986; los huelguistas de hambre estaban aproximándose a la disyuntiva de seguir hasta el fin o levantarse; los panistas tenían varios días con los puestos fronterizos bloqueados; el Colegio Electoral hacía su dictamen priísta; los empresarios maquiladores lloraban por las pérdidas ocasionadas en sus industrias a raíz del bloqueo panista de puentes; y estaba próxima la entrevista De la Madrid-Reagan. En esos días llegaron a Chihuahua los líderes nacionales de los partidos de oposición: Pablo Emilio Madero, Arnoldo Martínez Verdugo, Rosario Ibarra de Piedra y Heberto Castillo.

La tensión crecía como en una olla de vapor, los panistas tenían tomados los puentes internacionales, el conflicto poselectoral se había internacionalizado, tanto por la vecindad, como por la situación política que se acercaba a una definición: la alternativa era radicalizar el movimiento y cruzar la frontera de la no-violencia o el desvanecimiento.

Los líderes de izquierda acercaron el hombro y se montaron sobre el caso Chihuahua; Heberto Castillo daba una salida digna a los huelguistas: caminar por el país para organizar un movimiento nacional, y el proceso de convergencia escalaba un paso más. Cuando el momento coyuntural permitía que el caso Chihuahua saltara a otros niveles de conflictividad, la "razón" y la "prudencia" llegaron y develaron su rostro, los huelguistas decidieron levantarse de sus campamentos a escasos dos días antes de la entrevista De la Madrid-Reagan; los panistas desalojaron los puentes fronterizos, se firmó el efímero pacto de Ciudad Juárez y el caso Chihuahua se resolvió para el aparato estatal sin sangre; el secretario de Gobernación llegó con esto a la antesala de los precandidatos a la presidencia.

El pacto fue firmado en los siguientes términos:

"En Chihuahua y Durango el fraude electoral designa gobernadores, alcaldes y diputados espurios y en Oaxaca se atropella al pueblo para imponer alcaldes.

"ESTAS AUTORIDADES SON ILEGÍTIMAS DE ORIGEN Y NO CONTARÁN CON EL APOYO DE LOS PUEBLOS AGRAVIADOS.

"Es necesario y urgente que los mexicanos de todas las tendencias ideológicas, amantes de la democracia, sumemos fuerzas para lograr que el pueblo mexicano elija a sus gobernantes a través de elecciones auténticas, para lo cual es imperativo reformar las actuales leyes electorales [...] llamamos al pueblo a integrarse a un movimiento por la democracia plural e invitamos a Luis H. Álvarez, Víctor Manuel Oropeza y Francisco Villa-

real Torres a que MARCHEMOS POR TODA LA REPÚBLICA PARA CONVOCAR AL PUEBLO A ORGANIZARSE EN FORMA PERMANENTE, a fin de defender el sufragio efectivo y lograr la democratización de los organismos sociales.”<sup>45</sup>

Casi un mes después del pacto juarense se celebró en la ciudad de México un “Foro por el sufragio efectivo” convocado por partidos y organizaciones cívicas. 6 y 7 de septiembre fueron días para discutir sobre la democracia y llegar a una serie de acuerdos: formar comisiones para implementar los acuerdos; organizar foros regionales; propiciar un debate nacional y pluralista sobre el sufragio efectivo; repudiar los fraudes de Chihuahua, Durango y Oaxaca.<sup>46</sup>

Paralelamente, el aparato estatal implementa una nueva reforma política y el partido oficial sufre lo peor que le puede pasar: el surgimiento de una “corriente democrática”, que fue inmediatamente descalificada; la nueva reforma política sería aprobada en diciembre en contra de la oposición que suscribió el pacto de Juárez tres meses antes.

En esos días, lo efímero del pacto se expresaría, cuando el polémico Heberto Castillo comenzara a escribir contra el PAN y contra los panistas que fueron a denunciar el fraude a Washington.

Por su parte, en el PSUM también se dio un debate interno importante: la corriente del Movimiento de Acción Popular (MAP), reprobaría el pacto plural con la argumentación de que el partido: “se ha venido desdibujando, al grado de aparecer como aliado de fuerzas ultraderechistas”.<sup>47</sup>

La gran convergencia del movimiento chihuahuense generó este efímero pacto plural y también ejemplificó las limitaciones y conflictos que se dan cuando se unen grupos con posturas antagónicas: a pesar de defender la democracia electoral, no se logra un mínimo consenso. De esta forma, el aparato estatal sigue teniendo enfrente a un panismo que no logra o no puede saltar las trancas de sus propias contradicciones, de discursos incendiarios y repliegues prudentes; y a una izquierda principista que se “muere en la raya” con sus argumentaciones, pero que no logra atraer a las masas de este país.

El pacto plural fue efímero y la convergencia chihuahuense encontró, como el agua, su nivel.

#### EPÍLOGO: CHIHUAHUA DESPUÉS DE LA BATALLA

Eran las seis de la tarde del histórico 3 de octubre; todo el costosísimo dispositivo estaba listo para que Fernando Baeza protestara como gobernador; el lugar, el Gimnasio Universitario Manuel Bernardo Aguirre, convertido en recinto oficial.

<sup>45</sup> Desplegado que apareció en *La Jornada*, 12 de agosto de 1986.

<sup>46</sup> Declaración del Foro por el sufragio efectivo, *La Jornada*, 7 de septiembre de 1986.

<sup>47</sup> Texto firmado por Çordera, Gershenson, Woldenberg, Córdova, Whaley, en *La Jornada*, 14 de septiembre de 1986.

La familia priísta estaba de fiesta; después de 23 meses, el presidente Miguel de la Madrid regresaba a Chihuahua, para ser testigo mudo del cambio de poderes. El PRI se transformaba en gobierno, en la metamorfosis acostumbrada; cerraban las oficinas de campaña y el partido volvía a su vida normal: la inercia.

Había expectación en el Gimnasio, los asistentes se acomodaban en sus lugares, gobernadores de otros estados, funcionarios, líderes sindicales, diputados, senadores, los ex gobernadores del estado; de pronto se escuchó un aplauso fuerte: había llegado el Loco Valdez, invitado especial. Dieron las 18:10 hs. y entró la comitiva presidencial; todos de pie y el aplauso prolongado de los asistentes. Se inicia el rito, el nuevo gobernador lee su mensaje y se tocan uno a uno los puntos sensibles, la emotividad inunda el discurso político, cuatro palabras se repiten en el texto: esperanza, concordia, trabajo y eficiencia...

“Debemos apagar la hoguera donde arde infecunda la ira [...] la unanimidad no es posible [...] la represión no está en nuestros planes [...] que no se confunda paciencia con debilidad [...]”

La ciudad fue vigilada con un dispositivo de seguridad para alto riesgo; en el Gimnasio estaban los dirigentes y los invitados especiales y frente al palacio de gobierno empezó una verbena popular, los que no tuvieron cupo en el recinto oficial; los que llenaron la plaza, las masas de maniobra, campesinos, ejidatarios, colonos, señoras de distintas ciudades y rancherías del estado esperaban pasivos la actuación prometida de Lucha Villa; la paisana.

Una ciudad dividida; a sólo cuatro cuadras, otra parte de la población llenó la Plaza de Armas, los panistas hacían un mitin de repudio frente a la Catedral; volvía la efervescencia del “verano caliente”, se agitaban las banderas otra vez. El ánimo no era el mismo que se sintió en los meses de julio y agosto. Para los perdedores también estaba cuesta arriba el horizonte.

Los oradores hablaron de la nueva etapa de lucha, se explicó lo que fueron a hacer a la OEA en Washington; se leyó un mensaje de no bienvenida al presidente, y Barrio con la mayor emotividad, exhortó a sus seguidores a condenar: “Guerra sin cuartel al nuevo gobierno [...] vamos a seguir luchando, pero con amor cristiano [...]”; sólo se anunciaron nuevas medidas de desobediencia civil.

La división que dejó el proceso electoral se expresó este 3 de octubre; el cambio de poderes inminente y el movimiento de resistencia civil de los panistas. El gobierno de Baeza no tendrá el contenido simbólico de la renovación, ni el tiempo de gracia que casi todos tienen, sino la necesidad urgente de cubrir dos retos: hacerse fuerte y lograr cierta legitimidad para poder gobernar. Los panistas declararon guerra y que no los dejaran gobernar, “hasta que se derrumbe”.

Los polémicos obispos del norte fijaron otra vez su posición, aceptaron de hecho que Baeza sería gobernador y pidieron el cumplimiento de las

demandas sociales del pueblo, pero "sin autoritarismo ni represiones, sin paternalismo ni manipulaciones".

La visita del presidente De la Madrid sirvió de catalizador para que se exhibiera y demandara solución a los viejos problemas; se apeló al jefe de gobierno como instancia simbólica de resolución; los obreros de Aceros de Chihuahua, a casi un año de iniciada su huelga, pidieron solución y una entrevista con el presidente, pero no hubo tiempo para atenderlos; los aceros han sido una presencia constante de lo que implica la política de reordenamiento económico. El presidente sólo vino y se fue; para el pueblo de Chihuahua fue una visita distante.

Una parte de los chihuahuenses llevará consigo una afrenta, aunque un signo parece claro: la fuerza de la inercia y el repliegue de agosto harán que la gente poco a poco se acostumbre a una cotidianeidad similar a la que tenía antes de las elecciones; no se puede estar siempre con la bandera en la mano, y tal vez llegarán los tiempos de la reconciliación.

Las elecciones de Chihuahua serán un caso más para la memoria política del país, tal vez uno de los más complicados.

Para unos y para otros, la versión sobre lo que sucedió el 6 de julio estará muy arraigada; para los priistas, una victoria que ahora se hace gobierno; para los panistas, un fraude y probablemente una victoria moral que se hace movimiento de resistencia pacífica a largo plazo; la izquierda local a la expectativa entre los dos y con la alternativa del movimiento democrático; los obispos con una postura de impugnación; los empleados y trabajadores, a seguir arreando la crisis; los empresarios de nuevo a lo suyo y a negociar con el nuevo gobierno. La democracia sólo fue de coyuntura; y la mayor parte de la población que estuvo cercana o distante de la batalla electoral y poselectoral sólo oír de nuevo tronar los cuetes.

En Chihuahua la unanimidad, que de hecho se impuso, no será legítima, porque más allá de los puestos de elección disputados, se está afianzando una sociedad civil más plural, para la cual el unipartidismo que ahora gobierna será demasiado estrecho.

En este 3 de octubre, los líderes llamaron a la reconciliación; Barrio y Baeza le imprimieron a su discurso un color propio, uno desde el gobierno y el otro desde la resistencia. El aplauso final en el Gimnasio puso punto final al acto, eran las 18:50 hs. de la tarde. Las banderas ondeaban en la Plaza de Armas, como una respuesta a su líder, casi como sincronizadas, las campanas de la Catedral anunciaban las 9 de la noche. Los ritos se habían cumplido.

#### ESBOZO DE UN FUTURO PROBABLE

¿De qué forma el gobierno emanado de un conflicto electoral va a hacer gobernable una situación política de equilibrios inestables, cuando quedó demostrado que evitar el triunfo priísta hubiera necesitado trasgredir la

frontera entre la no-violencia y la violencia? ¿Cuál es el futuro de un movimiento de resistencia pacífica? ¿Cuál será la evolución que tenga la distancia entre la legitimidad y la legalidad en el caso Chihuahua?

Octubre de 1986. Después de tomar posesión Baeza, al igual que en el delamadridismo, empezó a barrer la casa y saltaron denuncias contra la corrupción en el magisterio chihuahuense, que fue el principal aparato burocrático de movilización en la campaña electoral del PRI; y para no faltar a la cita, los arreglos entre los grupos priístas también expresaron públicamente su descomposición; el ex secretario de gobierno fue acusado de fraude.

El ajuste de cuentas se inició y cada sector de la gran convergencia empezó a pagar el costo de haberse manifestado contra el fraude: auditorías sorpresivas y con dedicatoria para algunos comerciantes e industriales; silenciamiento para los panistas; pugna entre la Iglesia y el gobierno; vigilancia sobre la prensa y represión al *Diario de Juárez*; concertación con los grupos que aceptan la legitimidad del nuevo gobierno.

Baeza inicia la reconciliación y pone a funcionar una convocatoria para realizar unos foros sobre la ley electoral, el problema las reformas de 1985; el propósito es hacer una consulta; el fin, lograr legitimidad cuando ya no tiene relevancia. La convocatoria de los foros es la comprobación de que el aparato estatal puede abrir o cerrar a voluntad el rigor jurídico, pues todo depende de la coyuntura; antes fue frenar a la oposición, ahora es mostrar apertura.

La oposición panista se repliega a un movimiento pacifista de resistencia, cuyo futuro será probablemente la inanición. El PAN decide no participar en los foros sobre la ley electoral, pero al mismo tiempo intenta formar cierta opinión pública de lo que debería reformarse; tampoco acepta las dos diputaciones plurinominales que le son entregadas.

Noviembre de 1986. Los primeros fuegos después de la batalla electoral surgen con un conflicto de agricultores; se crea un grupo emergente, Frente Único de Productores del Campo, y decide presionar para una negociación, bloquea la carretera Panamericana en demanda de nuevos precios de garantía y contra el aumento de los combustibles; después de tres días, con una opinión pública en contra, son desalojados violentamente por el ejército y la policía.

El aniversario de la Revolución mexicana, gesta heroica e historia pasada, es el pretexto de las escaramuzas entre contingentes de priístas y panistas en Chihuahua y en Ciudad Juárez; el desfile es priístas y los del blanquiazul intentan incorporarse al acto y aprovechar la tribuna, pero son rechazados.

Diciembre de 1986. La Iglesia vuelve a la escena política y convoca a los talleres de la democracia; entre la legitimidad y la legalidad, el reto se hace presente; la Iglesia y sus talleres y el gobierno y sus foros. El germen electoral es recordado y renovado, después de la batalla hay que discutir sobre la democracia que no llegó.

El nuevo gobierno en Chihuahua se enfrenta a dos retos: hacer legítima su gestión, frente a una sociedad civil que los vio arribar por la puerta del conflicto al palacio de gobierno; y dominar los acontecimientos para neutralizar los brotes de descontento que quedaron después de la batalla y los que puedan emerger en un futuro próximo. De cualquier forma el nuevo sexenio chihuahuense ya empezó.

Entre la memoria y el olvido, tres serán los ejes de un futuro probable, que cruzarán la dinámica política en Chihuahua: una gobernabilidad frágil, una resistencia inerte y una legitimidad en entredicho.